

Distr.
GENERAL

HRI/CORE/1/Add.5
3 de junio de 1992

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

DOCUMENTO DE BASE QUE FORMA PARTE INTEGRANTE
DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS PARTES

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

[20 de enero de 1992]

I. TERRITORIO Y POBLACION

1. Datos estadísticos fundamentales sobre el Reino Unido, basados en las cifras más actualizadas de que se dispone:

Ingreso por habitante	14.570 dólares de los EE.UU. (OCDE)
Producto nacional bruto	834.166 millones de dólares de los EE.UU. (OCDE)
Tasa de inflación	9,5% (1989/90)
Deuda externa	Deuda neta del sector público: 150.600 millones de libras esterlinas (1990)
Tasa de desempleo	Hombres: 7,6% Mujeres: 3,5% (1990)
Tasa de alfabetización	No disponible: se estima que se acerca al 100%
Porcentaje de población que habla la lengua materna	No disponible: se estima que se acerca al 100%
Esperanza de vida	Hombres: 73,2 años Mujeres: 78,8 años (1991)
Tasa de mortalidad infantil	Niños: 8,9 por 100.000 Niñas: 6,8 por 100.000 (1990)

Tasa de mortalidad materna	6,5 por 100.000 (1986-1988)
Tasa de fecundidad	Tasa global de fecundidad: 1,81 (1989)
Porcentaje de población de menos de 15 y más de 65 años	Hombres de menos de 15 años: 10,5% Mujeres de menos de 15 años: 9,9% Hombres de más de 65 años: 6,3% Mujeres de más de 65 años: 9,4% (1990)
Porcentaje de la población que vive en zonas rurales y urbanas	En zonas rurales 10,4% En zonas urbanas 89,6% (datos del censo de 1981 correspondientes sólo a Gran Bretaña)
Porcentaje de jefes de familia que son mujeres	27% (1990)

II. ESTRUCTURA POLITICA GENERAL

A. El sistema de gobierno

2. El sistema de gobierno parlamentario del Reino Unido no se basa en una constitución escrita, sino que es el resultado de una evolución gradual a lo largo de varios siglos. La esencia del sistema actual, que tiene ya más de dos siglos, consiste en que los dirigentes políticos que ejercen el poder ejecutivo son miembros del Parlamento y responden ante una asamblea elegida, la Cámara de los Comunes, cuyos miembros representan a los distintos distritos electorales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La permanencia en funciones del Gobierno depende del apoyo de una mayoría de la Cámara de los Comunes, en la que ha de responder a la crítica fundamentada y pública de una oposición capaz de sucederle si el electorado así lo decide.

Los poderes del Parlamento

3. El Parlamento es la autoridad legislativa suprema del país. Sus tres componentes -la Reina y las dos Cámaras (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, elegida por el pueblo esta última)- están exteriormente separados. Las Cámaras, cuya composición se basa en principios diferentes, sólo celebran reuniones conjuntas en ocasiones de carácter simbólico tales como la coronación o la ceremonia de apertura del Parlamento, en que la Reina convoca a los Comunes a la Cámara de los Lores. Como órgano legislativo del Estado, sin embargo, el Parlamento es un órgano corporativo que, con algunas excepciones (véase infra), no puede legislar sin el concurso de todas sus partes.

4. El Parlamento puede legislar para toda Gran Bretaña, para una sola de sus partes o para varias de ellas. También puede legislar para las islas del Canal y para la isla de Man, que son dependencias de la Corona, sin formar parte de la Gran Bretaña y que tienen órganos legislativos subordinados que legislan sobre asuntos insulares. Los órganos legislativos de las islas del Canal (los Parlamentos -States- de Jersey y de Guernsey) y de la isla de Man (la Tynwald Court) están integrados por la Reina, el Consejo Privado y las

asambleas locales. Incumbe al Ministro del Interior (Home Secretary), en su calidad de miembro del Consejo Privado especialmente encargado de los asuntos insulares, examinar minuciosamente cada medida legislativa antes de su presentación al Consejo.

5. La Ley orgánica del Parlamento (Parliament Act), de 1911, fijó en cinco años la duración del período parlamentario (si bien el Parlamento puede ser disuelto y pueden celebrarse elecciones generales antes de que expire el plazo legal). Al no estar sujeto al tipo de limitaciones legales impuestas a los órganos legislativos de los países que tienen constituciones escritas, el Parlamento goza prácticamente de libertad total en materia legislativa: en términos generales, puede, pues, promulgar, derogar o modificar cualquier ley, legalizar situaciones ilegales, invalidar y declarar punibles actos que en su momento fueron legales, y anular, de ese modo, decisiones de los tribunales ordinarios; puede también dejar sin efecto convenios vigentes o convertir un convenio en ley vinculante.

6. En la práctica, sin embargo, el Parlamento no ejerce su supremacía de esta manera, ya que sus miembros, que tienen presente el derecho no escrito (common law) que se ha ido elaborando a lo largo de los siglos, tienden a actuar de conformidad con los precedentes y la tradición. Además, ambas Cámaras son sensibles a la opinión pública y si bien la validez de una ley del Parlamento que ha sido debidamente aprobada, y legalmente promulgada y publicada por la autoridad pertinente, no puede ser impugnada ante los tribunales, es improbable que un Parlamento apruebe una ley que él sepa que no va a contar con el apoyo de la opinión pública. El sistema británico de gobierno basado en los partidos contribuye a garantizar que la labor legislativa del Parlamento se lleve a cabo teniendo en cuenta su responsabilidad ante el electorado.

La Corona y el Parlamento

7. Constitucionalmente, la existencia jurídica del Parlamento depende del ejercicio de las prerrogativas reales (es decir, en términos generales, del conjunto de los poderes residuales que aún tiene la Corona). Sin embargo, los poderes de la Corona en relación con el Parlamento están sujetos a limitación y modificación por vía legislativa y siempre se ejercen por intermedio y con el consejo de ministros que son responsables ante el Parlamento.

8. En su calidad de "cabeza" temporal de la Iglesia de Inglaterra, la Reina designa, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, a los arzobispos y obispos, algunos de los cuales forman parte de la Cámara de los Lores a título de "Lores eclesiásticos". Como "dispensadora de honores", la Reina confiere también a ciertas personas (por recomendación del Primer Ministro, el cual consulta a su vez, por lo general, a otras personas) la condición de "par"; significa esto que los "Lores laicos", que constituyen el resto de la Cámara Alta, también han sido creados por prerrogativa real, pudiéndose aumentar su número en todo momento.

9. El Parlamento es convocado por proclamación real, y es igualmente la Reina la que lo prorroga (o suspende hasta el siguiente período de sesiones) y la que lo disuelve. Al comienzo de cada período de sesiones, la Reina se traslada solemnemente a la Cámara de los Lores y declara personalmente abierto

el Parlamento. (En circunstancias especiales, puede confiar esta función a comisionados reales que actúan en su nombre.) En la ceremonia de apertura, la Reina se dirige a los Lores y a los Comunes reunidos en asamblea, y en su discurso, que es redactado por sus ministros, expone las líneas generales de la política del Gobierno y propone el programa legislativo para el período de sesiones que se inicia.

10. Ninguna ley puede entrar en vigor sin la sanción de la Soberana, sanción que, según la práctica establecida, es generalmente comunicada al Parlamento por los Presidentes (Speakers) de las dos Cámaras. Por otra parte, la Soberana conserva, además del derecho a ser consultada, el derecho a promover o, por el contrario, a poner en guardia contra la adopción de ciertas decisiones, pero hace mucho que el derecho de veto ha caído en desuso.

Los períodos de sesiones del Parlamento

11. El mandato del Parlamento se divide en períodos de sesiones. Cada período de sesiones suele durar un año y por lo general concluye con una prórroga, aunque también puede ser disuelto. Durante un período de sesiones, cualquiera de las Cámaras puede suspender las sesiones por propia iniciativa y hasta la fecha que estime oportuna.

12. Al clausurarse un período de sesiones, la prórroga suele entrar en vigor mediante un anuncio hecho a ambas Cámaras en nombre de la Reina, en la Cámara de los Lores. La prórroga se mantiene en vigor hasta una fecha establecida, fecha que a su vez puede retrasarse o anticiparse mediante una proclama ulterior. La prórroga supone la cesación inmediata de prácticamente todas las actividades parlamentarias. Significa esto que todos los proyectos de ley parlamentarios no completados durante el período de sesiones deben volver a presentarse en el período siguiente a menos que se desista de ellos.

13. Por lo general, el Parlamento se declara disuelto al término del período de cinco años que dura su mandato, pero también puede el Gobierno solicitar su disolución antes de la conclusión de éste. Con arreglo a la práctica establecida, la continuidad del Parlamento queda garantizada por la declaración simultánea de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de elecciones, con indicación de la fecha en que deberá reunirse el nuevo Parlamento elegido. En caso de que la Soberana fallezca entre la fecha de disolución del Parlamento y la fijada para la celebración de las elecciones generales, tanto éstas como la reunión del nuevo Parlamento se aplazarán por un período de 14 días.

14. La suspensión de las sesiones no afecta a la labor parlamentaria en curso. El Parlamento puede volver a reunirse antes de lo previsto (en el caso de una suspensión de más de 14 días), ya por proclamación real, ya, si el interés público lo requiere, con mayor urgencia, haciendo uso de los poderes que cada Cámara otorga especialmente a su Presidente.

Irlanda del Norte

15. En el período comprendido entre 1921 y 1972 Irlanda del Norte tuvo su propio Parlamento y su Gobierno, que estaban subordinados al Parlamento de Westminster, pero en 1972, después de varios años de violencia sectaria y

terrorismo, el Gobierno de Irlanda del Norte dimitió, estableciéndose a partir de entonces el gobierno directo por el Parlamento del Reino Unido, al mismo tiempo que se confiaban los poderes ejecutivos a un Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Ministro del Gabinete, que desde entonces ha desempeñado las funciones que antes ejercían el Gobierno de Irlanda del Norte y sus departamentos. Con arreglo a la Ley sobre Irlanda del Norte, de 1974, corresponde ahora al Parlamento de Westminster examinar, en forma de proyectos de instrumentos legales, la mayoría de las leyes que antes se elaboraban en el marco de la Ley orgánica del Parlamento de Irlanda del Norte.

La Comunidad Europea

16. Desde la adhesión de la Gran Bretaña a la Comunidad Europea en 1973, han entrado en vigor en el país las disposiciones del Acta de Adhesión a las Comunidades Europeas, de 1972, relativas a la aplicación del Tratado de Roma. Esas disposiciones se refieren a diversos tipos de normas comunitarias, tales como los reglamentos, que son legalmente vinculantes y se aplican directamente a todos los países miembros, y las directivas, elaboradas también por la Comunidad (cuyo Consejo de Ministros está integrado por representantes de los Gobiernos de todos los Estados miembros). Las directivas son igualmente vinculantes en lo que respecta al resultado que debe lograrse en cada uno de los Estados miembros a los que están dirigidas, pero permiten a los parlamentos nacionales decidir la forma y el método de aplicación de sus disposiciones. Se han adoptado procedimientos parlamentarios especiales para mantener informados a los miembros de ambas Cámaras del Parlamento británico acerca de las novedades que se registran en el ámbito de la Comunidad.

17. Gran Bretaña, al igual que otros países miembros de la Comunidad, envía diversos representantes al Parlamento europeo. El Parlamento controla las instituciones de la Comunidad, para lo cual examina la legislación, hace preguntas a la Comisión y al Consejo de Ministros y debate todas las cuestiones importantes de política de la Comunidad.

La composición del Parlamento

18. El sistema bicameral es parte integrante del Gobierno parlamentario británico. La Cámara de los Lores (la Cámara Alta) y la Cámara de los Comunes (la Cámara Baja) se reúnen por separado y se basan en principios totalmente distintos, pero ambas Cámaras participan en el proceso legislativo.

19. Desde los orígenes del Parlamento, el equilibrio de poderes entre las dos Cámaras ha registrado cambios fundamentales. Y ese proceso continuo de desarrollo y adaptación se ha acelerado mucho en los últimos 75 años. Con arreglo a la práctica actual, el poder parlamentario reside fundamentalmente en la Cámara de los Comunes, de elección popular, pero hasta el siglo XX el poder de veto de los Lores sobre las medidas propuestas por los Comunes era teóricamente ilimitado. Ahora, con arreglo a las Leyes orgánicas del Parlamento de 1911 y 1949, determinados proyectos de ley pueden convertirse en ley sin el consentimiento de los Lores. La Ley de 1911 restringió ya el derecho de los Lores a retrasar la aprobación de proyectos de ley relativos exclusivamente a gastos o impuestos y limitó su poder para rechazar otro tipo de leyes. De hecho, con arreglo a la Ley de 1911, los Lores sólo podían retrasar por dos años la aprobación de los proyectos de ley. La Ley de 1949 redujo, a su vez, este plazo a un año.

20. Estas limitaciones de las facultades de la Cámara de los Lores se basan en la idea de que la principal función legislativa de esa Cámara debe reducirse en nuestros días a la revisión de los proyectos de ley, y de que su actividad no es opuesta sino complementaria de la de la Cámara de los Comunes.

La Cámara de los Lores

21. La Cámara de los Lores está integrada por:

- a) Los Lores eclesiásticos: los arzobispos de Canterbury y York, los obispos de Londres, Durham y Winchester, y los 21 obispos diocesanos de más antigüedad después de los citados, de la Iglesia de Inglaterra;
- b) Los Lores laicos, subdivididos en i) todos los pares y parejasas de Inglaterra, Escocia, Gran Bretaña y el Reino Unido que no hayan renunciado a sus títulos con arreglo a la Ley sobre los pares (Peerage Act) de 1963; ii) todos los pares y parejasas vitalicios nombrados por la Corona en virtud de la Ley sobre pares vitalicios (Life Peerages Act) de 1958, y iii) los Lores jueces del Tribunal de Apelación, nombrados con carácter vitalicio en virtud de las leyes sobre los tribunales de apelación (Appellate Jurisdiction Acts) de 1876 y 1887 para asistir a la Cámara en sus funciones judiciales. Algunos de estos jueces pueden ser ya miembros de la Cámara y todos siguen siéndolo después de su jubilación.

22. El título de par hereditario lleva consigo el derecho a pertenecer a la Cámara de los Lores (la ley prevé diversos motivos de inhabilitación), siempre que el o la titular haga valer su derecho y tenga 21 años cumplidos, pero cualquier persona que herede un título de par puede, en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de la sucesión, renunciar a él por el resto de su vida de conformidad con la Ley sobre los pares (Peerage Act). Al renunciar al derecho a ser miembro de la Cámara de los Lores, los renunciantes adquieren el derecho de sufragio activo y pasivo para la elección de miembros de la Cámara de los Comunes.

23. La Soberana, atendiendo a los consejos del Primer Ministro, otorga títulos de par temporal (tanto hereditarios como vitalicios). Esos títulos se conceden, por lo general, en reconocimiento de destacados servicios prestados en el campo de la política o en otras esferas de la vida, o porque el Gobierno del momento desea que el beneficiario forme parte de la Cámara Alta. La Cámara de los Lores ofrece también la posibilidad de hacer participar en el Parlamento a hombres y mujeres cuyo parecer puede ser útil para el Estado, pero que no desean hacer política en el marco de un partido. A diferencia de la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores no tiene un número fijo de miembros, y de ellos son relativamente pocos los que se dedican de lleno a la política.

La Cámara de los Lores como última instancia judicial

24. Además de su labor parlamentaria, la Cámara de los Lores desempeña importantes funciones judiciales, ya que constituye la última instancia para las causas civiles en toda Gran Bretaña y para las causas criminales en

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. En principio, todos los Lores tienen derecho a asistir a la Cámara cuando ésta actúa como tribunal de apelación, pero en la práctica, y tradicionalmente, sus actuaciones judiciales están a cargo del Lord Canciller (Lord Chancellor), que acude de vez en cuando a la Cámara, los Lores magistrados (a los que se designa expresamente, como ya se ha dicho, para el desempeño de estas funciones de la Cámara y que reciben un sueldo) y -cuando es necesario- otros Lores que desempeñen o hayan desempeñado altos cargos judiciales.

La Cámara de los Comunes

25. La Cámara de los Comunes es una asamblea de representantes elegidos por sufragio universal de las personas que han alcanzado la mayoría de edad, y está integrada por hombres y mujeres (llamados miembros del Parlamento) que proceden de todos los sectores de la sociedad, con independencia de toda diferencia de orden económico o profesional. La Cámara de los Comunes tiene 650 escaños, e los que 523 corresponden a Inglaterra, 38 a Gales, 72 a Escocia y 17 a Irlanda del Norte.

26. Los miembros de la Cámara de los Comunes, que mantienen sus escaños durante todo el período parlamentario, son elegidos en las elecciones generales que se celebran en caso de disolución del Parlamento y de convocación para la constitución de otro por la Soberana, o en las elecciones parciales que tienen lugar cuando se produce una vacante en la Cámara por fallecimiento o dimisión de uno de sus miembros, o como consecuencia de la elevación de un miembro a la Cámara de los Lores.

27. Todo miembro del Parlamento que desee renunciar a la Cámara de los Comunes sólo puede hacerlo recurriendo al mecanismo técnico de solicitar del Ministro de Finanzas (Chancellor of the Exchequer) "un cargo de interés para la Corona". El desempeño de un cargo de esa índole constituye, en efecto, un motivo de inhabilitación para formar parte de la Cámara de los Comunes y cuando un miembro del Parlamento es nombrado para ocuparlo, su escaño queda automáticamente vacante. Los dos cargos de la Corona que se utilizan con ese fin son los de Senescal (Steward) o Baile (Bailiff) de la Corona en Chiltern Hundreds, y Senescal del Señorío de Northstead, antiguos cargos honorarios que no entrañan responsabilidades alguna. El nombramiento sólo dura hasta que otro miembro del Parlamento lo solicita a su vez, y esas solicitudes no son nunca rechazadas.

Las elecciones legislativas

28. Para fines electorales, Gran Bretaña está dividida en zonas geográficas o circunscripciones (constituencies), cada una de las cuales envía un representante a la Cámara de los Comunes. A fin de garantizar una representación equitativa existen Comisiones de Delimitación para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las cuales revisan periódicamente -a intervalos no inferiores a 10 ni superiores a 15 años- los límites de las circunscripciones establecidas para las elecciones de miembros del Parlamento y de representantes del Reino Unido en el Parlamento Europeo, y recomiendan la redistribución de escaños que estimen necesaria a la luz de los cambios demográficos y de otro tipo que se hayan registrado en el intervalo. Esas

comisiones pueden también presentar informes provisionales sobre determinadas circunscripciones cuando, por ejemplo, sea necesario adaptar los límites de la circunscripción de que se trate a una nueva delimitación del término municipal.

29. Las disposiciones relativas a las elecciones legislativas figuran en las Leyes sobre la representación popular (Representation of the People Acts). Las elecciones de representantes para la Cámara de los Comunes se efectúan por sufragio secreto. En ellas pueden participar todos los ciudadanos británicos, ciudadanos de otros países del Commonwealth y ciudadanos de la República de Irlanda residentes en el Reino Unido que tengan 18 años cumplidos y no estén inhabilitados para ello por la ley. No tienen, en cambio, derecho a votar en elecciones legislativas las siguientes personas: los pares y parejas (estas últimas cuando lo sean por derecho propio y no por matrimonio), que son miembros de la Cámara de los Lores; los extranjeros; los enfermos internados en aplicación de la legislación sobre la salud mental; los delincuentes que están cumpliendo condena en prisión y cualquier persona que en los cinco años anteriores haya sido condenada por corrupción u otras prácticas electorales ilegales. Para poder votar en determinada circunscripción, el elector debe estar registrado en el correspondiente padrón electoral actualizado. Los oficiales de registro electoral establecen cada año, en efecto, el padrón electoral de cada circunscripción.

30. Aunque el voto no es obligatorio, en una elección general la mayoría del electorado (más de 32,5 millones de personas -el 75,4%- en las elecciones electorales de junio de 1987) ejerce su derecho. En las elecciones parciales el porcentaje de participación puede ser muy inferior. Por lo general, los electores votan personalmente en los colegios electorales especialmente establecidos con ese fin.

31. Todo hombre o mujer que sea ciudadano británico, ciudadano de otro país del Commonwealth o ciudadano de la República de Irlanda, no esté inhabilitado para el voto y tenga 21 años cumplidos, puede presentarse como candidato en las elecciones legislativas. Entre las personas inhabilitadas figuran los quebrados no rehabilitados, las personas condenadas a más de un año de privación de libertad, los miembros de la Cámara de los Lores, el clero de las Iglesias de Inglaterra, Escocia e Irlanda y de la Iglesia católica apostólica romana, y las personas afectadas por la Ley sobre inhabilitaciones para la Cámara de los Comunes (House of Commons Disqualification Act) de 1975, personas entre las que se encuentran las que desempeñan cargos judiciales, los funcionarios públicos, los miembros de las fuerzas armadas regulares o de los servicios de policía, y los ciudadanos británicos que son miembros de los órganos legislativos de países o territorios no pertenecientes al Commonwealth. También están inhabilitadas las personas que desempeñan una amplia variedad de cargos públicos, por ejemplo en empresas públicas o comisiones gubernamentales. Los candidatos pertenecen por lo general a uno de los principales partidos políticos nacionales, pero también los partidos más pequeños y otras agrupaciones pueden designar candidatos, y cualquier persona puede ser designada aun sin el apoyo de un partido. Toda candidatura debe estar firmada por dos electores, que la inician en calidad de proponente y coadyuvante, respectivamente, y por otros ocho electores inscritos en el padrón electoral de la circunscripción de que se trate.

32. El sistema de votación utilizado es el de la mayoría simple, en cuya virtud queda elegido el candidato que más votos haya obtenido en relación con cada uno de los siguientes, aunque no necesariamente más que todos ellos conjuntamente considerados.

33. Periódicamente, el Speaker preside una conferencia de miembros del Parlamento, en la que se examinan posibles cambios en las leyes electorales. Como en el caso de otros comités parlamentarios, la composición de la Conferencia refleja la importancia relativa de la representación de cada uno de los partidos en la Cámara. Las sesiones de la conferencia son privadas y sus recomendaciones se publican en forma de notas del Speaker al Primer Ministro.

El sistema de partidos

34. La existencia en Gran Bretaña de partidos políticos organizados, cada uno de los cuales propone su propia política al electorado ha dado lugar en el Parlamento a divisiones políticas claras, que se consideran fundamentales para un gobierno democrático. Aunque el sistema de partidos ha existido de una forma u otra desde el siglo XVIII, su estructura actual no empezó a definirse hasta finales del siglo XIX. Cada vez que se convocan elecciones generales (o parciales), los partidos pueden presentar candidatos, pero también puede presentarse a las elecciones cualquier ciudadano que lo desee. Al optar el día de los comicios por unos u otros candidatos, el electorado indica cuál de las políticas propuestas desearía que se aplicase. El candidato que más votos obtiene queda elegido, pero no se requiere una mayoría absoluta.

35. Desde 1945, el Partido Conservador ha ganado siete elecciones generales, seis el Partido Laborista. La gran mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes han representado a uno u otro de esos dos partidos. En las elecciones generales de junio de 1987 se presentaron candidatos en las 650 circunscripciones de la Gran Bretaña. En Inglaterra, Gales y Escocia, el Partido Laborista presentó candidatos a los 633 escaños vacantes, mientras que el Partido Conservador (que no se presentó en la circunscripción del Speaker) propuso 632. Los Partidos Liberal y Socialdemócrata, que en 1981 habían formado una alianza para concurrir a las elecciones generales de 1983 y 1987, presentaron, por su parte, conjuntamente 633 candidatos. Finalmente el Partido Nacional Escocés se presentó en 71 de las 72 circunscripciones de Escocia, mientras que el Plaid Cymru (nacionalistas galeses) se presentó en las 38 circunscripciones de Gales.

El Gobierno y la oposición

36. La práctica habitual es que la Soberana invite a formar gobierno al partido que más escaños (pero no necesariamente más votos) ha obtenido en una elección general, o que cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes. En ciertas ocasiones, cuando ningún partido ha conseguido esa mayoría, puede formarse un gobierno minoritario.

37. Por tradición, la Soberana designa Primer Ministro al jefe del partido de la mayoría, el cual elige un equipo de ministros y forma un gabinete de unos 20 miembros.

38. El segundo partido, por el número de escaños obtenidos, es oficialmente reconocido como "la oposición de Su Majestad" (o "la oposición oficial") y tiene su propio jefe y su propio "gabinete paralelo", cuyos miembros actúan como portavoces sobre los temas que son de la incumbencia de cada uno de los ministros del Gobierno. Los miembros del Parlamento pertenecientes a otros partidos, así como los miembros independientes de la Cámara, apoyan o se oponen al Gobierno según las opiniones de su partido o las suyas propias.

39. El Gobierno es el principal responsable del control y la organización de las labores de ambas Cámaras, tiene la iniciativa en materia de política general e indica, por ende, las decisiones que a su juicio debe adoptar el Parlamento, explicando y defendiendo su posición en debate público. A diferencia de los gobiernos del pasado, que se veían con frecuencia obligados a retirar medidas bajo la presión de miembros de su propio partido, la mayoría de los gobiernos actuales suelen contar con el voto de sus partidarios en la Cámara de los Comunes, por lo que, dependiendo de la mayoría global que hayan conseguido, pueden lograr la aprobación de sus proyectos de ley sin grandes modificaciones. Esta evolución, que es resultado de una mayor disciplina de partido, no sólo ha fortalecido la acción de Gobierno, sino que además ha realzado el papel de la oposición. A la oposición incumbe ahora, en efecto, la función de crítica como medio de presión, función que debe y se le da la oportunidad de desempeñar exponiendo, con arreglo a la práctica establecida en ambas Cámaras, sus propios puntos de vista.

El control parlamentario del poder ejecutivo

40. El control sobre el Gobierno se ejerce en definitiva mediante la facultad que tiene la Cámara de los Comunes de obligarle a dimitir aprobando para ello una resolución de "censura", rechazando una propuesta que el Gobierno estime tan fundamental para la aplicación de su política que haya hecho de ella "cuestión de confianza" o negándose a aprobar las asignaciones de recursos que se requieran para la administración pública.

41. Además del sistema de seguimiento estricto de la labor de los ministerios del Gobierno, que está a cargo de comités especiales, la Cámara de los Comunes ofrece diversos recursos para un riguroso examen de la política gubernamental, tanto por parte de la oposición como de los miembros de su propio partido que no participen directamente en las tareas del Gobierno. Como representante de los simples ciudadanos, todo miembro del Parlamento puede poner en tela de juicio la política propuesta por un ministro: i) interviniendo en el debate sobre determinado proyecto de ley, ya en segunda lectura formulando objeciones a sus principios generales, ya como habitualmente sucede, proponiendo enmiendas cuando el proyecto está siendo examinado por el comité correspondiente; ii) mediante el mecanismo de las interpelaciones parlamentarias; iii) durante los debates que se celebran con ocasión de la suspensión de los períodos de sesiones; o iv) durante los debates reservados para iniciativas de la oposición (Opposition days).

Las interpelaciones parlamentarias

42. El mecanismo de las interpelaciones en la Cámara de los Comunes, tal como existe en la actualidad, es en gran medida una novedad de este siglo. Hasta bien entrado el siglo XIX, los miembros del Parlamento tenían prácticamente,

en cualquier momento del debate ordinario, la posibilidad de dirigirse a la Cámara. Actualmente, las sesiones del Parlamento se dedican esencialmente a examinar los asuntos públicos, estimándose que las interpelaciones constituyen el medio más adecuado para obtener una información (a la que los miembros no tendrían acceso por otra vía) sobre las intenciones del Gobierno, así como el procedimiento más eficaz para exponer y, posiblemente, remediar las irregularidades que los electores pongan en conocimiento de sus representantes. Ocasionalmente, las interpelaciones pueden utilizarse como parte de una campaña colectiva organizada para conseguir un cambio en la política gubernamental; y puede, finalmente, haber interpelaciones "sugeridas", que son aquellas en las que un miembro del Parlamento formula determinada pregunta para dar al ministro responsable la oportunidad de hacer una declaración pública.

43. Si bien la admisión de preguntas se ha venido rigiendo fundamentalmente por normas basadas en las decisiones adoptadas por sucesivos Speakers con ocasión de interpelaciones concretas, en 1972 se introdujeron, sobre la base del informe presentado por un comité especial de la Cámara de los Comunes, ciertas modificaciones en la práctica y el procedimiento del mecanismo de interpelación.

B. La aplicación de las leyes

La administración

44. El poder judicial del Reino Unido es enteramente independiente del Gobierno y no está sujeto a la dirección ni el control de ningún ministro. La responsabilidad de la administración de justicia corresponde al Lord Chancellor (Lord Canciller), al Ministro del Interior y a los Secretarios de Estado para Escocia y para Irlanda del Norte. También participa en ella el Primer Ministro, que es el que recomienda a la Corona los candidatos para los cargos más elevados de la magistratura.

45. El Lord Canciller, que es el jefe del poder judicial (y a veces actúa como juez en la Cámara de los Loes), se ocupa del procedimiento judicial y es responsable de la administración de todos los tribunales que no sean los magistrates' courts (tribunales correccionales) y los coroners' courts (juzgados de instrucción), así como de varios tribunales administrativos. Nombra a los jueces y magistrados y se encarga en general de los sistemas de asesoramiento y asistencia letrada. Tiene también a su cargo la aplicación práctica de las reformas del derecho civil.

46. El Ministro del Interior se ocupa del derecho penal, de los servicios de policía, de las prisiones y de los servicios de libertad condicional y atención poscarcelaria, y tiene a su cargo la supervisión general de los tribunales correccionales y algunas otras funciones específicas, como la de aprobar el nombramiento de los asesores judiciales. La política penitenciaria y la administración de los centros penitenciarios son, a su vez, funciones que incumben a la Dirección de Prisiones, del Ministerio del Interior, y el Ministro del Interior nombra para cada establecimiento penitenciario una junta de visitadores que representa a la comunidad local y que vigila las condiciones del establecimiento de que se trate, así como de su administración y del trato que en él se da a los reclusos. Tiene además que informar al

Ministro del Interior acerca de cualquier abuso o motivo de preocupación de que tengan noticia. Esas juntas tienen facultades disciplinarias en caso de faltas graves de disciplina y se ocupan de las peticiones o quejas que reciben de los reclusos. Una junta especial de libertad condicional asesora al Ministro del Interior acerca de la puesta en libertad de los presos bajo palabra.

47. La responsabilidad del trato de los delincuentes menores de 17 años incumbe a los Ministerios del Interior y de Salud. El Ministro del Interior aconseja asimismo a la Reina en cuanto al ejercicio de la prerrogativa real de indulto para conceder el perdón a un condenado o para remitir la totalidad o parte de la pena impuesta por un tribunal.

48. El Attorney General (Procurador General) y el Solicitor General (Fiscal General) son los principales asesores del Gobierno en materia de derecho inglés y representan a la Corona en las causas nacionales e internacionales pertinentes. Ambos son abogados experimentados y miembros por elección de la Cámara de los Comunes, y tienen rango ministerial. El Procurador General, que lo es también de Irlanda del Norte, además de ejercer diversas funciones en el campo de lo civil es el máximo responsable de la aplicación de las leyes penales y supervisa, por otra parte, la actuación del Director of Public Prosecutions (Director del Ministerio Público). A él le incumbe, además, tramitar ciertos tipos de procedimientos penales en los que debe actuar con absoluta independencia y sin dejarse influir por sus colegas del Gobierno. El Fiscal General es, por su parte, el suplente del Procurador.

49. El Secretario de Estado para Escocia recomienda la designación de todos los jueces, con excepción de los de más alta categoría, nombra al personal del High Court of Justiciary (Alto Tribunal de Justicia) y del Court of Session (Tribunal Supremo) de Escocia, y se encarga de la composición, la dotación de personal y la organización de los sheriff courts (tribunales de condado) escoceses. La dotación de personal y la administración de los district courts (tribunales de distrito) incumbe, a su vez, a las autoridades locales de cada distrito o de las islas. El Secretario de Estado es también responsable del derecho penal de Escocia, de la prevención del delito, de los servicios de policía y del sistema penal, y para todo lo referente a la libertad bajo palabra cuenta con el asesoramiento de la junta escocesa de libertad condicional. El Secretario de Estado asume también la responsabilidad de la asistencia letrada en Escocia.

50. El Lord Advocate (Procurador General) y el Solicitor General (Fiscal General) de Escocia son los asesores jurídicos superiores del Gobierno para los asuntos escoceses y los principales representantes de la Corona para todo lo referente a los litigios en ese país. Ambos son ministros del Gobierno. El Procurador General se ocupa de todas las cuestiones de política y administración de justicia y es responsable de los redactores parlamentarios de proyectos de ley en Escocia. Asume también la plena responsabilidad del enjuiciamiento de los delitos, y aunque ocupa un puesto ministerial, tiene que actuar con absoluta independencia en el desempeño de sus funciones.

51. En Irlanda del Norte, la administración de todos los tribunales incumbe al Lord Canciller, mientras que la Dirección de Irlanda del Norte, que depende del Secretario de Estado, tiene a su cargo la policía y el sistema penal.

El Lord Canciller es responsable en general del sistema de asistencia y asesoramiento jurídicos en Irlanda del Norte.

Los tribunales penales

52. En Inglaterra y en Gales, la decisión inicial de iniciar un procedimiento penal incumbe normalmente a la policía. Una vez que la policía formula una inculpación, el caso se transmite al Crown Prosecution Service (Servicio Procesal de la Corona), el cual decide si ha de ser aceptado para su enjuiciamiento por los tribunales o si debe interrumpirse el procedimiento. En Escocia es el Ministerio Público el que decide si se entabla o no un procedimiento. En Irlanda del Norte existe un Director del Ministerio Público. En Inglaterra y Gales (y excepcionalmente en Escocia) también los particulares pueden iniciar un procedimiento penal. La policía puede hacer amonestaciones y, en Escocia, el fiscal puede también amonestar en lugar de iniciar un proceso.

53. En abril de 1988 se estableció, como departamento gubernamental, la Dirección de Delitos Graves de Fraude que investiga y enjuicia los casos más graves y complejos de fraude en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Inglaterra y Gales

54. La Prosecution of Offences Act (Ley de procedimiento penal) de 1985 estableció en Inglaterra y Gales el Servicio Procesal de la Corona, cuyo jefe, que es el Director del Ministerio Público, asume la responsabilidad del enjuiciamiento de los delitos penales ante los tribunales correccionales y en los demás tribunales de primera instancia en lo penal (Crown Court). El Servicio está dividido en 31 zonas, cada una de las cuales está dirigida por un fiscal superior de la Corona, el cual, con residencia en la localidad, es nombrado por el Director del Ministerio Público. El Servicio proporciona abogados para la vista de los casos en los juzgados correccionales e instruye a los letrados que han de actuar en los demás tribunales. Aunque la decisión de proceder se delega generalmente en los fiscales superiores de la Corona, algunos casos son directamente tramitados por el Servicio: se trata, por lo general, de casos de importancia nacional, excepcionalmente difíciles o que son causa de gran preocupación pública, así como aquellos en los que es necesario evitar cualquier sospecha de influencia local. Se incluyen entre ellos los delitos de terrorismo, violación de las leyes sobre los secretos de Estado, asociación ilícita en gran escala para la importación de drogas, y delitos cometidos por agentes de la policía.

Escocia

55. El Procurador General de Escocia, que ejerce sus funciones a través del Oficial de la Corona (Crown Officer), es responsable de las causas que se sustancian ante el Alto Tribunal de Justicia, y ante los tribunales de condado o de distrito. No existe ningún derecho general de iniciación de un proceso ante los tribunales por los particulares; con pequeñas excepciones, sólo el Procurador General, sus suplentes, o los fiscales, que son sus representantes en el plano local pueden perseguir de oficio los delitos. El asesor permanente del Procurador General de Escocia para las cuestiones procesales es el Crown Agent (Abogado de la Corona), que es el jefe de la Fiscalía y que en

la Cancillería de la Corona cuenta con la asistencia de un grupo de funcionarios públicos legalmente calificados y con experiencia como fiscales adjuntos. Del enjuiciamiento de las causas en el Alto Tribunal se encargan el fiscal y los oficiales de la Cancillería, mientras que el proceso en sí incumbe al Fiscal General para Escocia (suplente ministerial del Procurador General) y a abogados suplentes que, colectivamente, constituyen la Asesoría Jurídica de la Corona. De la preparación y el encausamiento de los delitos juzgados por los juzgados de condado y de distrito están encargados los fiscales. La policía y otros servicios encargados de la observancia general de las leyes investigan los delitos e informan acerca de ellos al fiscal, el cual decide si procede o no iniciar el procedimiento, ateniéndose a las directrices de la Asesoría de la Corona.

56. Conforme a la Ley de procedimiento penal (Escocia) de 1987, el fiscal puede, en el caso de delitos de menor cuantía, hacer al presunto delincuente una oferta condicional de pena fija, en lugar del encausamiento: el delincuente no está obligado a aceptar esa oferta pero, si lo hace, el Ministerio Público pierde su derecho a iniciar el proceso.

Irlanda del Norte

57. En Irlanda del Norte, el Director del Ministerio Público, que depende del Procurador General, persigue todos los delitos que hayan sido objeto de inculpación y puede hacerlo también en las causas sumarias graves. De otros casos sumarios entiende, en cambio, la policía.

Los tribunales de Inglaterra y Gales

58. Los delitos penales pueden agruparse en tres categorías. Los delitos que sólo pueden juzgarse previo procesamiento, esto es, los delitos muy graves como el asesinato, el homicidio, la violación y el robo, sólo pueden ser juzgados por los tribunales superiores de primera instancia, que están presididos por un juez, asistido por un jurado. Los delitos sumarios, que son los delitos menos graves y la gran mayoría de las infracciones penales, son juzgados por jueces no profesionales y no remunerados, sin jurado. Una tercera categoría de delitos (como el hurto, la violación de domicilio o las lesiones intencionadas) pueden ser juzgados, ya en juzgados correccionales, ya por los tribunales superiores de primera instancia, dependiendo de las circunstancias de cada caso y de los deseos del acusado.

59. Además de ocuparse de los delitos sumarios y de los delitos de la tercera categoría que se les confíen, los juzgados correccionales remiten los casos a los tribunales de primera instancia, ya sea para la continuación del proceso ya para sentencia. Se remiten para la continuación del proceso aquellos delitos que sólo pueden juzgarse previo procesamiento o los delitos de la tercera categoría que se haya decidido por otro motivo someter al tribunal de primera instancia. Se remiten, en cambio, para sentencia aquellos casos en que el acusado haya sido juzgado sumariamente en un caso de la tercera categoría, pero que el juzgado haya decidido someter al tribunal de primera instancia para sentencia.

60. Normalmente, los jueces actúan en audiencia pública, a la que también tienen acceso los medios de información. El tribunal está por lo general formado por tres jueces no profesionales, que son asesorados en cuestiones de derecho y procedimiento por un letrado legalmente capacitado o por un auxiliar igualmente calificado. La designación de los jueces incumbe al Lord Canciller, excepto en Lancashire, en la zona metropolitana de Manchester y en Mersey, donde los nombramientos competen al Canciller del Ducado de Lancaster. Hay actualmente unos 28.000 jueces no profesionales.

61. Hay, además, 63 jueces legalmente calificados y remunerados, que trabajan a tiempo completo, que pueden juzgar una causa solos y que generalmente presiden tribunales en zonas urbanas en las que hay mucho trabajo.

62. Los casos en que están implicados menores de 17 años se ven ante los tribunales de menores. Son éstos juzgados especiales que, o bien actúan aparte de los demás tribunales, o bien entienden de esos casos a horas diferentes. Sólo pueden estar presentes ciertas categorías de personas, y los medios de información no pueden publicar el nombre de ningún menor que esté implicado, ya sea como acusado o como testigo. Cuando un menor de 17 años es acusado juntamente con una persona de esos años o más, la causa se ve en un tribunal ordinario, ya sea correccional o de primera instancia. Si el joven o la joven son declarados culpables, el tribunal puede transferir el caso para sentencia a un tribunal de menores, a menos que esté convencido de que no es conveniente hacerlo.

63. Los tribunales de primera instancia se ocupan de las causas más graves, de la condena de los delincuentes que les son remitidos para sentencia por los juzgados correccionales y de los recursos de apelación contra las decisiones de estos últimos. Hay tribunales de este tipo en unos 90 centros, y su presidencia está confiada a jueces del Alto Tribunal de Justicia, jueces itinerantes (circuit judges), que trabajan a tiempo completo, o por jueces temporales (part-time recorders). Todos los juicios contradictorios se ven ante un jurado. Para el examen de los recursos y de los casos pendientes de sentencia, los jueces se reúnen en audiencia con un juez itinerante o con un juez a tiempo parcial.

64. El Gobierno tiene el proyecto de modificar los procedimientos judiciales en los casos de fraude grave o complejo, con el fin de eludir el procedimiento completo de los juzgados correccionales, cuando así lo considere oportuno el Ministerio Fiscal, pero con un procedimiento especial con arreglo al cual el acusado podrá solicitar del tribunal de primera instancia su absolución basándose en lo infundado de la acusación.

Las apelaciones

65. Toda persona condenada por un juzgado correccional puede apelar al tribunal de primera instancia contra la sentencia que se le ha impuesto si se ha confesado culpable, o contra la condena o sentencia dictada contra él, si ha negado la acusación. Cuando la apelación se refiere a una cuestión de derecho o de procedimiento judicial, el fiscal o el acusado pueden recurrir al Alto Tribunal de Justicia. Los recursos contra las decisiones del tribunal de primera instancia, ya se refieran al fallo condenatorio o a la pena impuesta, se dirigen al Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal). La Cámara de los

Lores es la última instancia de apelación para todos los casos, ya procedan del Alto Tribunal de Justicia o del Tribunal de Apelación. Para que un caso pueda llegar a la Cámara de los Lores, el tribunal que haya conocido del recurso anterior ha de certificar que en él se ha planteado una cuestión de derecho de importancia pública general, y, o bien ese tribunal, o la propia Cámara de los Lores, deben autorizar la sustanciación del recurso ante ésta. Los magistrados que se ocupan de los recursos interpuestos ante la Cámara de los Lores son los nueve Lores magistrados del Tribunal de Apelación.

66. El Procurador General puede solicitar la opinión del Tribunal de Apelación sobre una cuestión de derecho que se haya planteado en casos en los que una persona procesada sobre la base de un auto de acusación formal (indictment) haya sido absuelta; el tribunal está facultado para remitir, si fuere necesario, la cuestión de derecho a la Cámara de los Lores. La sentencia absolutoria original no resulta afectada, ni se revela la identidad de la persona absuelta sin su consentimiento. En virtud de una disposición de la Ley de procedimiento penal de 1988, que aún no se ha aplicado, el Procurador General, siempre que considere que una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia es excesivamente benigna, está facultado para remitir el caso al Tribunal de Apelación, el cual puede, si lo considera procedente, agravar la sentencia dentro de los límites máximos establecidos por el Parlamento para el delito de que se trate.

Escocia

67. En Escocia, el Alto Tribunal de Justicia juzga delitos tales como el asesinato, la traición y la violación; los tribunales del condado se ocupan, por su parte, de los delitos menos graves y los tribunales de distrito de las faltas. Las causas criminales se ven, ya en juicio solemne, cuando el proceso se inicia sobre la base de un auto de acusación formal, y el juez actúa acompañado de un jurado de 15 miembros, ya en procedimiento sumario, sin jurado. Todas las causas que se ventilan ante el Alto Tribunal de Justicia y las más graves de las que se confían a los tribunales de condado son resueltas por un juez y un jurado. El procedimiento sumario se aplica a las causas menos graves confiadas a los tribunales de condado y a todas las causas de incumbencia de los tribunales de distrito. Desde el punto de vista administrativo, los tribunales de distrito dependen de las autoridades de éste y de las autoridades locales correspondientes, en el caso de las islas; los jueces son jueces de paz, no profesionales, y las autoridades locales pueden designar de oficio hasta la cuarta parte de sus miembros elegidos para que sean jueces. En Glasgow hay cuatro jueces remunerados que son abogados y trabajan a tiempo completo y cuya jurisdicción penal es equivalente a la de un juez de condado que actúe en juicio sumario. Los niños menores de 16 años que hayan cometido un delito o a los que por otras razones especificadas por la ley se considere que es necesario aplicar ciertas medidas coercitivas pueden ser juzgados por un tribunal de menores compuesto por tres miembros de la comunidad local.

68. En Escocia, los seis sheriffdoms (circunscripciones judiciales basadas en los condados) se dividen en distritos judiciales, cada uno de los cuales tiene uno o más sheriffs, que son los jueces del tribunal. El Alto Tribunal de Justicia, que es el tribunal supremo de Escocia, funciona a la vez como tribunal de primera instancia y como tribunal de apelación. Cualquiera de los

jueces que a continuación se enumeran puede actuar en el Alto Tribunal: el Lord Justice General (presidente del tribunal), el Lord Justice Clerk (vicepresidente del tribunal) o uno de los Commissioners of Justice (vocales). La sede del Tribunal está en Edimburgo, pero el Alto Tribunal puede también actuar en otras ciudades.

69. El Alto Tribunal en Edimburgo se ocupa asimismo de todos los recursos de apelación. Tanto en el caso de procedimiento normal como de procedimiento sumario, existe la posibilidad de apelar contra el fallo condenatorio, contra la sentencia o contra ambos. En caso de anulación del fallo el Tribunal puede autorizar la revisión de la causa en un nuevo juicio. No existe posibilidad de apelación ulterior a la Cámara de los Lores. En los procedimientos sumarios el fiscal puede apelar basándose en una cuestión de derecho, contra la absolución o la sentencia. El Procurador General de Escocia puede pedir al Alto Tribunal su opinión sobre cualquier cuestión de derecho que se haya planteado en una causa en la que el procesado contra el que se haya dictado auto formal de acusación haya resultado absuelto. Esa gestión no afecta, sin embargo, al fallo absolutorio dictado en la causa original.

Irlanda del Norte

70. La estructura de los tribunales de Irlanda del Norte es muy semejante a la de Inglaterra y Gales. El trabajo diario de tramitación sumaria de los casos de menor cuantía incumbe a los juzgados correccionales presididos por un juez residente legalmente calificado que trabaja a tiempo completo. Los delincuentes menores de 17 años y los menores de 17 años en general que requieran cuidados, protección y control comparecen ante los tribunales de menores, que están compuestos por el juez residente y dos asesores no profesionales (uno de los cuales, como mínimo, ha de ser una mujer) especialmente capacitados para ocuparse de esos menores. De los recursos contra los fallos de los juzgados correccionales entienden los tribunales de condado.

71. Los tribunales superiores de primera instancia se ocupan de las causas penales en las que ya ha habido auto de acusación. Los jueces de esos tribunales proceden del Alto Tribunal o de los tribunales de condado. El juicio tiene lugar ante un solo juez, y todas las causas controvertidas que no sean las que entrañen delitos especificados en la legislación de emergencia se someten también a la consideración de un jurado. De los recursos contra los fallos condenatorios o las sentencias dictadas en estas causas entiende el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte. Los procedimientos para la interposición de recurso ante la Cámara de los Lores son similares a los vigentes en Inglaterra y Gales.

El juicio

72. En el Reino Unido, los juicios penales se basan esencialmente en un debate contradictorio entre el ministerio fiscal y la defensa. Dado que la ley presume la inocencia de todo acusado mientras no se haya demostrado su culpabilidad, el ministerio público no goza de ninguna ventaja, ni real ni aparente, sobre la defensa. El acusado (defendant y, en Escocia, accused) tiene derecho a utilizar los servicios de un abogado y puede, si es necesario, ser asistido por un defensor de oficio pagado con cargo a los fondos

públicos. En caso de prisión preventiva, el acusado puede recibir la visita de un abogado a fin de preparar debidamente su defensa. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, durante la preparación de la causa, el ministerio público suele informar al abogado defensor sobre los documentos pertinentes que no tiene la intención de utilizar como prueba, mostrándoselos incluso cuando es requerido para ello. El fiscal debe también informar al abogado defensor acerca de los testigos cuyas declaraciones puedan ayudar al acusado y que él no tiene la intención de citar como testigos de cargo. El abogado defensor o el fiscal pueden, por otra parte, alegar que el estado mental del acusado hace improcedente su juicio, en cuyo caso, y siempre que el jurado (o, en Escocia, el juez) se pronuncie en ese sentido, se ordena su ingreso en un hospital determinado.

73. Los juicios penales se celebran normalmente en audiencia pública, y en ellos se aplican rigurosamente las normas referentes a la presentación de pruebas relacionadas con los hechos. En caso de admisión de pruebas improcedentes, puede anularse la sentencia en segunda instancia. Durante el juicio, el acusado tiene derecho a escuchar las declaraciones de los testigos de cargo y a proceder a su contrainterrogatorio, normalmente a través de un abogado; a hacer comparecer a sus propios testigos, a los que puede legalmente obligarse a comparecer si no lo hicieren voluntariamente; y a dirigirse al tribunal, ya sea personalmente o a través de un abogado. El defensor tiene en todo caso derecho a ser el último que hable en el juicio. El acusado no puede ser interrogado si previamente no ha consentido en declarar bajo juramento como testigo en defensa propia. En caso de que preste testimonio, no podrá, sino en circunstancias excepcionales, ser objeto de contrainterrogatorio respecto de su persona y conducta; por lo general, el ministerio público no recurre a ese testimonio.

74. En Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, la Ley de Procedimiento Penal de 1987 prevé que en los casos complejos de fraude habrá una audiencia pública preparatoria ante el tribunal de primera instancia, en la que el juez podrá resolver las cuestiones de derecho que se le planteen y definir los puntos que habrán de someterse a la consideración del jurado.

El jurado

75. En los juicios con jurado, el juez resuelve las cuestiones de derecho, resume las pruebas para mejor información del jurado y da a éste instrucciones sobre la legislación pertinente, y absuelve, finalmente, al acusado o dicta contra él sentencia condenatoria. Sólo el jurado puede decidir si el acusado es o no culpable. En Inglaterra y Gales, si el jurado no llega a un veredicto unánime, el juez puede pedirle que dé su veredicto por mayoría siempre que, en el jurado normal formado por 12 personas, no haya más de 2 disidentes. En Escocia, donde el jurado está formado por 15 personas, el veredicto puede establecerse por simple mayoría pero, por regla general, nadie puede ser declarado culpable sin pruebas corroborantes. Si el veredicto del jurado es de inocencia (not guilty o, en Escocia, not proven, que es otro posible veredicto de "absuelto de culpa y cargo"), el fiscal no tiene derecho a apelar, y el acusado no puede ser juzgado de nuevo por el mismo delito. En cambio, en caso de que el veredicto sea de culpabilidad (guilty), el acusado tiene derecho a interponer recurso ante el tribunal competente.

76. El jurado es totalmente independiente del poder judicial. Todo intento de injerencia en la labor del jurado, una vez que ha prestado juramento, es punible en virtud de la Contempt of Court Law (Ley de Desacato a los tribunales) de 1981.

77. Aunque el derecho de la defensa a recusar a tres de las personas propuestas para un jurado sin motivar esa recusación va a ser abolido en Inglaterra y Gales, ambas partes seguirán teniendo la posibilidad de recusar a posibles jurados, exponiendo sus motivos, cuando estimen que determinado miembro del jurado puede estar predispuesto en un sentido o en otro.

78. Todas las personas de edad comprendida entre los 18 y los 65 años cuyo nombre aparezca en el registro electoral, con algunas excepciones, pueden tener que actuar como jurados tras elección al azar de sus nombres. (En la Ley de Procedimiento Penal de 1988 se hacen propuestas para elevar de 65 a 70 años el límite máximo de edad en Inglaterra y en Gales.) No son elegibles como jurados los miembros de la judicatura, los clérigos, las personas que en los diez años anteriores hayan ejercido la abogacía, los miembros de la Secretaría del Lord Canciller o de los servicios de policía, prisiones y libertad condicional, así como las personas que padecen determinadas enfermedades mentales. Están, por otra parte, inhabilitadas para actuar como jurados las personas que, dentro de los diez años anteriores, hayan estado cumpliendo cualquier parte de una pena de prisión, reclusión en un reformatorio para menores o detención, o hayan estado sometidas a una orden de servicio a la comunidad, o las que, dentro de los últimos cinco años, hayan estado en régimen de libertad condicional. Toda persona que haya sido condenada a cinco años o más de privación de libertad está descalificada para toda la vida.

Los Coroners Courts (juzgados de instrucción)

79. Los coroners investigan los casos de muerte violenta o sospechosa y tratan de determinar su causa. Tales casos pueden ser puestos en conocimiento del coroner local (que puede ser una persona médica o legalmente calificada, o ambas cosas a la vez) por los médicos, la policía, el registrador, diversas autoridades públicas o particulares. Si la muerte ha sido repentina y por causa desconocida, el coroner no necesita llevar a cabo una investigación si, como resultado de la autopsia, llega a la conclusión de que la muerte se ha debido a causas naturales. Cuando haya razón para creer que se trata de muerte violenta o sospechosa, o cuando la muerte se haya producido en la cárcel o en otras circunstancias especificadas, el coroner procederá a una investigación y determinará, en el ejercicio de sus facultades judiciales cómo, cuándo y por qué se ha producido esa muerte. El coroner puede entonces proceder, ya sea solo, ya, en determinadas circunstancias, con la asistencia de un jurado. En Escocia, el fiscal local investiga privadamente todos los casos de muerte súbita o sospechosa y puede comunicar sus conclusiones a la Cancillería de la Corona (Crown Office). En un número reducido de casos, la investigación sobre una muerte accidental puede efectuarse ante el sheriff (representante de la Corona en el condado). En ciertas categorías de casos, tales como los de muerte en prisión, la investigación es obligatoria. Además, en aquellos casos en que las circunstancias hayan sido motivo de inquietud para la población, el Fiscal General puede, si lo estima procedente y de interés público, instruir una investigación.

El derecho civil

80. Las principales subdivisiones del derecho civil en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte son: el derecho de familia, el derecho de bienes, el derecho de contratos y el derecho de la responsabilidad civil (torts), que comprende los daños sufridos por una persona por culpa de otra, independientemente de la relación que exista entre ellas, con inclusión de figuras tales como las de negligencia, difamación e injerencia ilegal en los bienes o derechos de otro. Otras ramas del derecho civil son el derecho constitucional y administrativo (particularmente en lo concerniente al ejercicio del poder ejecutivo), el derecho laboral, el derecho marítimo y el derecho eclesiástico. El derecho civil escocés tiene sus secciones propias, muchas veces análogas.

81. En 1985 se estableció un órgano especial para el estudio de posibles mejoras en el sistema de justicia civil de Inglaterra y Gales. Su informe se publicó en junio de 1988 y en él se recomendaban reformas destinadas a acelerar la tramitación de los casos, a velar por el aprovechamiento óptimo de los recursos judiciales y a reducir el costo de los litigios.

Los tribunales civiles en Inglaterra y Gales

82. La limitada jurisdicción civil de los magistrates' courts (que son fundamentalmente tribunales correccionales) abarca las causas matrimoniales en lo concerniente a guarda de los hijos y alimentos, adopción, investigación de la paternidad y tutela. Comprende también los casos de molestias o perjuicios causados en violación de la legislación sobre salud pública y los relacionados con la recaudación de los impuestos municipales. A estos magistrados incumbe asimismo conceder las licencias necesarias para la apertura de establecimientos de bebidas, oficinas de apuestas y clubes.

83. La jurisdicción de los 274 juzgados de condado comprende las acciones relativas a contratos y a casos de responsabilidad civil no contractual, con pequeñas excepciones; las causas sobre fideicomisos e hipotecas y las acciones para la recuperación de tierras. Los casos que implican reclamaciones que exceden de los límites fijados pueden juzgarse en estos juzgados previo consentimiento de las partes o, en determinadas circunstancias, por haberles sido remitidos por el Alto Tribunal.

84. Entre otras cuestiones de que pueden entender los tribunales de condado figuran los contratos de alquiler-venta, las causas relacionadas con la legislación de alquileres, los litigios entre arrendadores y arrendatarios, y la adopción. Los casos de divorcio incumben a los tribunales de la misma categoría especialmente designados para tales causas y, fuera de Londres, hay algunos que se ocupan asimismo de los casos de quiebra. También entienden los tribunales de condado de las quejas referentes a discriminación racial y sexual. Cuando se trata de reclamaciones de menor importancia (en particular las relacionadas con los consumidores), existen servicios especiales de arbitraje y procedimientos simplificados.

85. Todos los magistrados del Tribunal Supremo, que, en realidad, comprende el Tribunal de Apelación, el Tribunal de la Corona (conjunto de tribunales superiores de primera instancia) y el Alto Tribunal de Justicia, así como

todos los jueces itinerantes y los recorders (jueces profesionales a tiempo parcial) pueden actuar en los tribunales de condado, pero cada tribunal tiene uno o más jueces itinerantes, que le han sido asignados por el Lord Canciller y que son quienes ejercen principalmente su competencia en las sesiones regulares del tribunal. Normalmente, el juez actúa solo, si bien, excepcionalmente y a petición del tribunal, puede ordenar un juicio con jurado.

86. El Alto Tribunal de Justicia está dividido en divisiones o salas: la Sala de la Cancillería (Chancery Division), la Sala del Tribunal de la Reina (Queen's Bench Division) y la Sala de Familia (Family Division). Tiene jurisdicción tanto en primera instancia como en apelación, y tanto en las causas civiles como en algunas causas penales. En general, se asigna a cada división o sala un determinado tipo de trabajo. Así por ejemplo, la Sala de Familia se ocupa de todos los asuntos que se refieren a la institución familiar, incluidos los relativos a la adopción y a la tutela. La Sala de la Cancillería ejerce su competencia en la interpretación de últimas voluntades y en la administración de patrimonios hereditarios. Finalmente las cuestiones de derecho marítimo y comercial son de la competencia de los tribunales comerciales y del Almirantazgo, de la Sala del Tribunal de la Reina.

87. Cada uno de los 80 jueces aproximadamente del Alto Tribunal de Justicia es inicialmente destinado a una división o sala, pero puede ser trasladado a otra mientras sigue en funciones. Fuera de Londres, en donde actúa a través de los Reales Tribunales de Justicia (Royal Courts of Justice), el Alto Tribunal actúa por intermedio de los 26 tribunales centrales de condado. Para la vista de las causas en primera instancia, los magistrados del Alto Tribunal actúan solos. Los recursos de apelación sobre asuntos civiles contra tribunales inferiores se ven en tribunales de dos (o, a veces, tres) jueces, o ante un solo juez de la sala pertinente, designado por el Lord Canciller.

Los recursos de apelación

88. Los recursos referentes a causas matrimoniales, de adopción y de tutela vistas en los juzgados correccionales o de paz pasan a la Sala de Familia del Alto Tribunal. De los recursos interpuestos en los casos de declaración de paternidad entienden los tribunales que forman Tribunal de la Corona, los cuales entienden también de los referentes a decisiones de los comités de magistrados en materia de licencias para la apertura de establecimientos de bebidas, juegos, etc. Los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por el Alto Tribunal y por los tribunales de condado se ven ante el Tribunal Superior de Apelaciones (Sala de lo Civil), que está constituido por el Master of the Rolls (Guardián de la Abogacía) y 27 Lores, y pueden llegar hasta la Cámara de los Lores, que es el tribunal final de apelación en todos los casos civiles y penales.

89. Los jueces en la propia Cámara de los Lores son los nueve Lores del Comité de apelación de dicha cámara (Lords of Appeal in Ordinary), cuyo quórum mínimo es de tres, pero que por lo general constituyen un grupo de cinco y, a veces, incluso de siete. Los miembros de la Cámara que no son juristas no asisten a la vista de los recursos (que normalmente tiene lugar en una sala de reuniones y no en la cámara legislativa), pero los aquellos que ejercen o han ejercido funciones judiciales superiores pueden participar también. El Presidente de la Cámara de los Lores en su calidad de tribunal es el Lord Canciller.

Escocia

90. Los principales tribunales civiles son los tribunales de condado (sheriff court) y la Corte Suprema (Court of Session). La jurisdicción civil del tribunal de condado abarca casi todos los tipos de acción, y no está normalmente limitada por la importancia del caso. Gran parte del trabajo incumbe al sheriff (representante de la Corona en el condado) de cuyas decisiones puede apelarse al sheriff-principal, o directamente al Tribunal Supremo.

91. El Tribunal Supremo de Escocia funciona solamente en Edimburgo y tiene en general facultades para ocuparse de todo tipo de acción. La excepción principal es la de las acciones exclusivamente reservadas a los tribunales de condado porque el valor de lo reclamado sea inferior a una suma establecida. El Tribunal Supremo se divide en dos partes: la Cámara Exterior (Outer House), que es un juzgado de primera instancia, y la Cámara Interior (Inner House), que actúa principalmente como tribunal de apelación. La Cámara Interior se divide a su vez en dos salas que tienen la misma categoría y cada una de las cuales está integrada por cuatro jueces: la primera sala está presidida por el Lord Presidente (Lord President) y la segunda, por el Lord Magistrado Auxiliar (Lord Justice Clerk). Los recursos presentados a la Cámara Interior pueden impugnar tanto las sentencias de la Cámara Exterior como las de los tribunales de condado. De las decisiones de la Cámara Interior puede recurrirse a su vez a la Cámara de los Lores. Los jueces del Tribunal Supremo de Escocia equivalentes a los del Alto Tribunal de Justicia, y el Lord Presidente del Tribunal Supremo ejercen las mismas funciones que el Lord Justice General (Presidente de la Sala de la Corona) en el Alto Tribunal de Justicia.

92. El Scottish Land Court (Tribunal Escocés de la Tierra) es un tribunal especial que se ocupa exclusivamente de cuestiones referentes a la agricultura. Su presidente tiene la categoría y los derechos de un magistrado del Tribunal Supremo, y los demás miembros son especialistas en agricultura ajenos a la profesión judicial.

Irlanda del Norte

93. En Irlanda del Norte, las causas civiles de menor cuantía se ven en los tribunales de condado, aunque también los tribunales correccionales o juzgados de paz tienen facultad para conocer de algunas categorías. El tribunal superior en lo civil es el Alto Tribunal de Justicia, de cuyas sentencias cabe recurrir al Tribunal de Apelación. Estos dos tribunales, junto con los de la Corona, constituyen la Corte Suprema de Justicia de Irlanda del Norte, cuya práctica y procedimientos son análogos a los de Inglaterra y Gales. La Cámara de los Lores es la última instancia para todas las causas civiles.

El procedimiento civil

94. En Inglaterra y Gales es el perjudicado el que inicia la acción civil, no requiriéndose investigación preliminar alguna sobre la autenticidad del perjuicio. El procedimiento que se sigue ante el Alto Tribunal se inicia por lo general con un requerimiento de comparecencia (writ of summons) dirigido por el demandante al demandado y en el que se especifica la naturaleza de la

reclamación. El demandado que tiene la intención de oponerse a la demanda se lo hace saber al tribunal. Seguidamente se presentan a éste escritos en los que se expone más detenidamente la cuestión objeto de la controversia (los alegatos). En los tribunales de condado, el juicio se inicia con un auto de comparecencia dirigido al demandado por el tribunal, y el procedimiento ulterior es más sencillo que ante el Alto Tribunal.

95. Las declaraciones de divorcio deben pronunciarse en audiencia pública, pero el procedimiento que se aplica a la mayoría de las causas no controvertidas suprime la necesidad de declarar ante el tribunal y permite la toma en consideración de pruebas escritas, por el secretario del mismo.

96. Los juicios civiles, como asunto privado, pueden por lo general terminar en cualquier momento por desistimiento del demandante o por avenencia entre las partes. Las acciones incoadas ante un tribunal suelen ser juzgadas sin jurado, excepto en los casos de difamación, detención ilegal o encausamiento indebido, casos en los cuales, en circunstancias especiales, cualquiera de las partes puede insistir en que sea un jurado el que se pronuncie, o en los casos de fraude, en los que sólo el demandado puede hacer uso de ese derecho. El jurado se pronuncia sobre las cuestiones de hecho y fija la indemnización de daños y perjuicios que corresponde al perjudicado. Sus conclusiones pueden adoptarse por mayoría.

97. En los juzgados de paz o de instrucción, la acción judicial se inicia con una demanda, basándose en la cual el tribunal puede enviar al demandado un auto de comparecencia. En ese auto se especifican los detalles de la demanda y la fecha en que se verá la causa. Las partes y los testigos prestan declaración en audiencia ante el tribunal. Los juicios acerca de cuestiones de familia son normalmente sustanciados por no más de tres jueces no profesionales, uno de los cuales será, a ser posible, una mujer, y no se permite la asistencia del público. El tribunal puede decidir sobre la guarda, el derecho de visita y la supervisión de los niños, así como sobre el pago de pensiones alimentarias a cónyuges e hijos.

98. El tribunal se encarga también del cumplimiento de la sentencia en las causas civiles. En su mayoría se trata de la entrega de sumas de dinero, que, en caso de impago, puede hacerse efectiva mediante el embargo de los bienes del deudor o mediante una orden judicial que exija al empleador que efectúe pagos periódicos al tribunal deduciéndolos del sueldo del deudor. En otros casos la sentencia consiste en una prohibición judicial en virtud de la cual se impida a alguien realizar un acto ilegal. La negativa a obedecer el fallo de un tribunal puede conducir a la prisión por desacato. La detención sólo podrá efectuarse en virtud del correspondiente mandamiento judicial.

99. Normalmente, el tribunal condena a la parte que pierde el proceso al pago de las costas del mismo, pero en el caso de los juicios de familia sobre alimentos, el fallo puede condenar a cualquiera de las partes a pagar la totalidad o parte de las costas de la otra.

100. En Escocia, los juicios ante el Tribunal Supremo o las acciones ordinarias ante los tribunales de condado (sheriff courts) se inician con el envío al demandado de un auto de comparecencia en el primer caso, o de una notificación en el segundo. En el Tribunal Supremo, el paso siguiente es la

publicación de la acción en las listas del tribunal. Todo demandado que tenga la intención de oponerse a la acción debe informar al respecto al tribunal y, en caso de no comparecencia, el tribunal dicta una declaración de ausencia en favor del demandante. En los procedimientos ordinarios ante los tribunales de condado, lo único que se pide al demandado es que comunique por escrito su intención de comparecer para oponerse, dentro de los días que, a partir de la entrega del auto inicial de comparecencia se hayan fijado en éste; el trámite siguiente es la comparecencia oficial ante el tribunal de las partes en litigio o de sus respectivos representantes.

101. En las causas sumarias (en las que se ventilan sumas pequeñas), el procedimiento del tribunal de condado es menos formal. La exposición de la demanda se incorpora a la notificación, y el procedimiento está previsto de modo que, en la mayoría de los casos, pueda llevarse a cabo sin que las partes implicadas tengan que comparecer en audiencia. Normalmente, ni ellas ni sus representantes tienen que comparecer cuando no hay oposición a la demanda.

102. En Irlanda del Norte, el procedimiento es similar al de Inglaterra y Gales. En los tribunales de condado se inicia con la presentación al demandado de un resumen de los cargos de acusación; no se presentan en cambio alegatos. Los fallos de los tribunales civiles se hacen efectivos por un procedimiento centralizado de cuya administración se encarga la llamada Oficina de Ejecución de las Sentencias (Enforcement of Judgements Office).

El Tribunal de Prácticas Restrictivas

103. El Tribunal de Prácticas Restrictivas (Restrictive Practices Court) es un tribunal especial del Reino Unido que se ocupa de los monopolios y de las prácticas comerciales restrictivas. De él forman parte cinco jueces y otras diez personas con experiencia industrial, comercial o de relaciones públicas.

Los tribunales administrativos

104. Los tribunales administrativos ejercen asimismo funciones judiciales propias, distintas de los demás tribunales. Por lo general, se constituyen con arreglo a las disposiciones legislativas que rigen su composición, sus funciones y su procedimiento. En comparación con los demás tribunales, suelen ser más accesibles, menos formales y menos onerosos. Por otra parte, están especializados en su particular ámbito de competencia.

105. La expansión del sistema de tribunales administrativos en el Reino Unido es relativamente reciente, ya que la mayoría de ellos se han establecido a partir de 1945. Independientes del Gobierno, estos tribunales se pronuncian sobre determinados derechos y obligaciones de los particulares entre sí o en relación con un departamento del Gobierno u otra autoridad pública. Varios tribunales administrativos importantes resuelven controversias entre particulares; así por ejemplo, los tribunales del trabajo desempeñan una función importante en los conflictos laborales. Algunos, como los que se ocupan de la seguridad social, entienden de las quejas presentadas por particulares contra las autoridades públicas. Otro grupo, que incluye los tribunales fiscales, decide sobre las pretensiones -no aceptadas- dirigidas por las autoridades públicas a los particulares, mientras que otros se ocupan

de los problemas y litigios que no se refieren directamente a derechos de índole financiera o de responsabilidad civil, como pueda ser el derecho a entrar en el Reino Unido o a visitar el país.

106. La designación de los miembros de los tribunales administrativos incumbe normalmente al Ministro al que corresponda las cuestiones de que se trate, pero también otras autoridades tienen facultad para nombrarlos en algunos casos. Por ejemplo, el Lord Canciller (y en Escocia el Lord Presidente del Tribunal Supremo) decide la mayor parte de los nombramientos en que se requieren los servicios de un presidente o de un miembro que sean juristas.

107. En muchas jurisdicciones judiciales se aplica un sistema de dos niveles, con un derecho inicial de apelación a un tribunal inferior y una última instancia de apelación, casi siempre sobre cuestiones de derecho, a un tribunal superior. Contra algunos tribunales superiores cabe asimismo recurrir, sólo sobre cuestiones de derecho, al Alto Tribunal de Justicia en Inglaterra y Gales, al Tribunal Supremo en Escocia y al Tribunal de Apelación en Irlanda del Norte. Hay pocas excepciones, por ejemplo las apelaciones relacionadas con la inmigración en aquellos casos en que no existe el derecho de apelar directamente a los tribunales de justicia contra el Tribunal de Apelación en Cuestiones de Inmigración.

108. El Consejo de Tribunales Administrativos (Council on Tribunals), órgano independiente establecido en 1958, se ocupa de la supervisión general de la mayoría de los tribunales de esta índole, prestando su asesoramiento sobre proyectos de leyes y reglamentos, controla sus actividades e informa sobre determinadas cuestiones. Un Comité Escocés del Consejo (Scottish Committee of the Council) ejerce las mismas funciones en Escocia. El Consejo tiene responsabilidades análogas con respecto a las investigaciones públicas.

III. MARCO NORMATIVO GENERAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Autoridades competentes en materias relativas a los derechos humanos

109. Con arreglo a la Constitución del Reino Unido, el disfrute de los derechos y libertades fundamentales es inherente a todo miembro de nuestra sociedad. Dichos derechos y libertades pueden sólo restringirse, y eso previa decisión democrática del Parlamento. El papel del Parlamento no es, por lo tanto, conferir tales derechos, sino considerar si es preciso limitarlos, sopesando en cada caso las necesidades de la sociedad frente a las del individuo. En los párrafos siguientes se exponen los mecanismos y las salvaguardias jurídicas que protegen los derechos humanos en el Reino Unido.

B. Recursos y sistemas de indemnización y rehabilitación

La asistencia letrada

110. Toda persona que necesite asesoramiento jurídico o representación legal ante un tribunal tiene derecho, si reúne las condiciones establecidas para ello, a recibir ayuda con cargo a los fondos públicos, ya sea gratuitamente, ya aportando ella misma una contribución en función de sus recursos. A nivel

gubernamental, la responsabilidad general de la asistencia letrada incumbe al Ministro de Justicia y, en Escocia, al Secretario de Estado para Escocia. Los sistemas de asistencia letrada en lo civil son administrados por la Junta de Asistencia Letrada, el Colegio de Abogados de Irlanda del Norte y la Junta de Asistencia Letrada de Escocia.

111. Las personas cuyos ingresos y ahorros no rebasen ciertos límites tienen derecho a que se le designe de oficio un procurador que les ayude en cualquier cuestión jurídica relacionada con sus circunstancias particulares. Forma parte de dicha ayuda asesorar al interesado sobre las leyes aplicables, escribir cartas en que su nombre y pedir la opinión de un abogado o letrado. En Inglaterra y Gales esa ayuda puede abarcar la representación del interesado en las causas civiles seguidas ante los tribunales correccionales, en las audiencias ante el Tribunal de examen de casos psiquiátricos y en ciertos procedimientos disciplinarios ante las Juntas de Visitadores de las cárceles. Las disposiciones pertinentes prevén que la ayuda abarcará la labor inicial hasta un determinado límite de costo.

112. Las personas que, por su situación económica, sean declaradas con derecho a asistencia de oficio pueden obtener ayuda letrada, que comprende la representación ante el tribunal, para la mayoría de los procesos civiles. Los solicitantes de este beneficio deben demostrar, no sólo que tienen motivos razonables para entablar un proceso o defenderse en él, sino que también es razonable que, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, reciban o sigan recibiendo asistencia letrada. Si se otorga esa asistencia, la causa sigue su curso ordinario, con la salvedad de que en Inglaterra y Gales el cliente no abona directamente suma alguna al letrado sino que todos los pagos se hacen a través del Fondo para la asistencia letrada.

113. En ciertas circunstancias, la parte no asistida puede, en caso de sentencia a su favor, hacerse reintegrar por el Fondo para la asistencia letrada las costas procesales en que haya incurrido. Si la persona asistida recupera o conserva, gracias al proceso, sumas de dinero o bienes, el Fondo de asistencia letrada puede percibir una primera comisión sobre dichas sumas o bienes para resarcirse de las sumas que él haya desembolsado en el caso.

114. En los procesos penales en Inglaterra y Gales, el tribunal competente puede ordenar que se otorgue asistencia letrada cuando ello redunde en interés de la justicia y el demandado tenga derecho a ayuda financiera. Por otra parte, debe decretarlo (en función de los recursos) cuando la persona de que se trate esté acusada de homicidio o cuando el fiscal recurra o solicite autorización para recurrir del Tribunal de Apelación (Sala de lo Penal) a la Cámara de los Lores. Cuando se trate de primera condena, ninguna persona que no haya estado legalmente representada en el juicio podrá ser condenada a pena de privación de libertad a menos que haya tenido la oportunidad de solicitar asistencia letrada.

115. En virtud de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal, de 1984, la Junta de Asistencia Letrada toma las disposiciones necesarias para que ante los juzgados correccionales haya abogados de oficio que asesoren y representen en la fase inicial a los demandados que precisen esa ayuda y para que haya asimismo, durante las 24 horas del día, abogados de oficio que proporcionen asesoramiento y asistencia a los sospechosos en las comisarías. Los servicios de los abogados de oficio son gratuitos.

116. Las disposiciones relativas a la asistencia letrada en los procesos penales de Irlanda del Norte son en general similares. En Escocia la ley prevé un sistema de abogados de oficio para los detenidos que comparecen ante los tribunales de condado o de distrito, no invocándose el criterio del "interés de la justicia" más que en los procesos sumarios, en los que la decisión acerca de la ayuda solicitada incumbe a la Junta Escocesa de Asistencia Letrada. La asistencia letrada para las causas penales en Escocia e Irlanda del Norte es gratuita, lo que significa que la persona que la recibe no tiene que aportar contribución alguna para sufragarla.

117. En cierto número de zonas urbanas hay centros jurídicos que proporcionan gratuitamente asesoramiento y representación letrada. Estos centros, entre cuyas fuentes de financiación, bastante diversas, figuran con frecuencia las autoridades locales, emplean generalmente a abogados remunerados de modo permanente, y muchos tienen asimismo trabajadores de la comunidad. Gran parte de su tiempo está dedicada a los problemas de la vivienda, el empleo, la seguridad social y la inmigración. También puede obtenerse asesoramiento gratuito en las Oficinas de Asesoramiento del Ciudadano, los centros de asesoramiento de los consumidores y de asesoramiento sobre la vivienda, y en los centros de asesoramiento especializados mantenidos por diversas organizaciones benéficas.

Indemnización por una condena/detención injusta

118. En octubre de 1988 el Reino Unido promulgó leyes destinadas a incorporar a ordenamiento jurídico las disposiciones del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En virtud del artículo 133 de la Ley de Procedimiento Penal de 1988, toda persona cuya condena por un delito penal haya sido revocada por el Tribunal de Apelación tendrá derecho: 1) previa solicitud presentada al margen de los plazos regulares establecidos, o 2) previo ejercicio por el Secretario de Estado de sus poderes de intervención para remitir la condena al Tribunal de Apelación, o 3) sobre la base de indulto concedido en virtud de la prerrogativa real de clemencia, a solicitar del Secretario de Estado una indemnización. Si la persona interesada falleciese, su representante personal podrá presentar al Secretario de Estado la solicitud correspondiente.

119. El Secretario de Estado decidirá en definitiva si procede o no pagar la indemnización, y determinará si la decisión del Tribunal de Apelación de revocar la condena o conceder el indulto se ha debido a que se ha producido o descubierto un hecho que prueba más allá de toda duda razonable un error judicial. Este criterio es menos restrictivo que el del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto Internacional, que requiere que se haya producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial. Para decidir si procede o no la indemnización, el Secretario de Estado tendrá también en cuenta si el no haberse revelado el hecho desconocido es en todo o en parte imputable a la persona que solicita la indemnización.

120. El artículo 133 de la Ley de Procedimiento Penal de 1988 no prevé la indemnización en el caso de la persona que haya estado detenida bajo la inculpación de un delito que posteriormente se ha demostrado infundada, o de la que ha sido absuelta por un tribunal o en virtud de apelación formulada en

el plazo fijado por la ley. En tales circunstancias el Secretario de Estado puede, a petición del interesado, autorizar el pago de una indemnización ex gratia.

121. Sólo se considerará la posibilidad de conceder una indemnización si la detención se ha debido a un error grave de un miembro de la policía o de otro órgano público, o en otras circunstancias excepcionales, como, por ejemplo, si en el juicio se dan a conocer hechos que exoneren plenamente al acusado. En cambio, no se tomarán en cuenta las solicitudes de indemnización basadas en el simple hecho de que, en el curso del juicio o durante la apelación, el ministerio público no haya podido demostrar más allá de toda duda razonable la realidad de la acusación formulada.

122. Si el Secretario de Estado considera que la indemnización se justifica con arreglo al artículo 133 de la Ley de Procedimiento Penal de 1988 o en virtud del sistema de la indemnización ex gratia, su cuantía será determinada por un asesor independiente. El Secretario de Estado se ha comprometido a abonar toda indemnización que recomiende el asesor respecto de una solicitud, cualquiera que sea su cuantía. La indemnización comprenderá el pago de las costas procesales razonables en que haya incurrido el solicitante.

123. La aceptación por el solicitante de la indemnización autorizada por el Secretario de Estado no le obliga a firmar compromiso alguno que limite su derecho a ejercer cualquier otra acción que considere oportuna.

124. Las personas retenidas por otras razones no basadas en una autorización legal, por ejemplo por error en el cálculo de la sentencia de un tribunal o por no haberse ejecutado sin dilación la orden judicial de puesta en libertad de una persona bajo fianza, también pueden solicitar del Secretario de Estado una indemnización ex gratia. Pueden asimismo presentar una demanda de daños y perjuicios.

La situación de las víctimas de la delincuencia

125. Los tribunales pueden ordenar a toda persona que haya sido condenada por un delito que abone a la víctima de éste una indemnización por las lesiones, pérdidas o daños que haya sufrido de resultas del mismo. En Inglaterra y Gales los tribunales tienen la obligación de considerar esta cuestión en todos los casos procedentes y de motivar toda decisión denegatoria. La indemnización a las víctimas debe tener prioridad sobre la multa en el caso de que el tribunal esté considerando la posibilidad de imponer ambas cosas, y, entre el cobro de la suma adjudicada como indemnización y el cobro de la multa, es al primero al que debe darse la preferencia.

126. Si el Servicio Procesal de la Corona decide no incoar el proceso, las víctimas pueden ejercitar una acción privada, pero en la práctica rara vez lo hacen. También pueden tratar de obtener daños y perjuicios ante los tribunales civiles. En todo caso, se ha simplificado el procedimiento ante éstos a fin de que, en casos de menor cuantía, las personas que carecen de conocimientos jurídicos puedan obtener satisfacción.

127. Todas las víctimas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sufran lesiones graves de causas de un delito violento en Gran Bretaña pueden solicitar indemnización con cargo a los fondos públicos con arreglo al plan de indemnización por lesiones derivadas de delito, plan que es administrado por una junta. La indemnización cubre los daños físicos y morales y la pérdida de capacidad, así como los ingresos no percibidos a causa del delito y las eventuales pérdidas futuras. En Irlanda del Norte existe una disposición separada en virtud de la cual la indemnización se abona con cargo a los fondos públicos cuando se trata de lesiones derivadas de delito penal y de daños maliciosos a los bienes, con inclusión del lucro cesante.

128. En febrero de 1990 Gran Bretaña ratificó la Convención Europea sobre la Indemnización a las Víctimas de Delitos con Violencia.

129. También se está tratando de atender a las necesidades de las víctimas de delitos en sus aspectos prácticos. Hay, en efecto, más de 350 planes de ayuda de los que puede beneficiarse el 93% de la población de Inglaterra y Gales, y más de 6.000 voluntarios capacitados, que hacen visitas, llaman por teléfono o escriben a las víctimas para ofrecerles información y asesoramiento. Los planes locales se benefician de subvenciones del Gobierno que cubren los sueldos de coordinadores a tiempo completo o parcial, o los costos de funcionamiento, y están coordinados por una organización nacional de apoyo a las víctimas, igualmente subvencionada por el Gobierno. Análogos, en su términos generales, son los planes que se aplican en Escocia e Irlanda del Norte.

130. En febrero de 1990 el Gobierno publicó la llamada Carta de la Víctima, en la cual se enunciaron por primera vez los principios fundamentales de la ayuda que las víctimas de la delincuencia tienen derecho a recibir de la administración encargada de la justicia penal.

C. Protección constitucional de los derechos humanos

131. El Reino Unido no tiene declaración de derechos ni constitución escrita. Su sistema de gobierno parlamentario es el resultado de una evolución gradual que ha durado varios siglos. Con arreglo a las disposiciones constitucionales vigentes, el disfrute de los derechos y las libertades fundamentales es inherente a todo miembro de nuestra sociedad. Por consiguiente, los derechos no son conferidos por el Gobierno, sino que ya existen a menos que el Parlamento decida que las necesidades de la sociedad obligan a restringirlos de alguna manera.

D. Incorporación de los instrumentos de derechos humanos en la legislación nacional

132. En el Reino Unido, los tratados y convenios no se incorporan directamente al derecho interno, como en otros países. Por eso, cuando sea preciso modificar las leyes para dar cumplimiento a un instrumento internacional, el Gobierno presenta un proyecto de ley basado en los artículos pertinentes del tratado o convenio de que se trate. Dicho proyecto de ley se tramita por los procedimientos parlamentarios normales.

E. Aplicación por los tribunales de los instrumentos
de derechos humanos

133. Los tribunales del Reino Unido interpretan sólo las leyes promulgadas por el Parlamento.

F. Organos nacionales encargados de vigilar la aplicación de
los derechos humanos

134. En el Reino Unido los derechos humanos están salvaguardados por la labor de los órganos establecidos con arreglo a las siguientes leyes:

- a) Ley sobre discriminación por motivos de sexo de 1975 (Comisión de igualdad de oportunidades);
- b) Ley de relaciones raciales de 1976 (Comisión de igualdad racial);
- c) Ley sobre la protección de los datos de carácter personal de 1984 (Registrador encargado de la protección de datos);
- d) Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 (Organismo de quejas contra la policía).

Igualdad de oportunidades

135. En virtud de la Ley sobre discriminación por motivos de sexo de 1975 es ilegal hacer a una persona objeto de trato menos favorable que a otra por motivos de sexo, en lo que se refiere a empleo (incluida la formación), educación y provisión al público de vivienda y otros bienes, instalaciones y servicios. También se declaran ilegales los anuncios que reflejen una intención discriminatoria ilícita. En cumplimiento de la directriz sobre igualdad de trato, promulgada por la Comunidad Europea, la citada Ley fue enmendada en 1986 con objeto de suprimir las exenciones de que gozaban las empresas que empleaban a cinco personas o menos, de conceder a la mujer el derecho legal a seguir trabajando hasta la misma edad que el hombre en aquellas ocupaciones en las que hasta entonces se preveía una edad de jubilación diferente, y de suprimir las restricciones que, en el caso de las mujeres, se aplicaban al trabajo por turnos y al trabajo nocturno. La Ley sobre igualdad de remuneración de 1970 (en su forma enmendada) concede a la mujer el derecho a un salario igual que el del hombre por la realización de un trabajo igual o que haya sido considerado equivalente con arreglo a un esquema de evaluación de puestos y, desde 1984, de un trabajo de igual valor. Ambas leyes se aplican por igual a la discriminación en contra de uno que del otro sexo. Leyes similares se han promulgado en Irlanda del Norte.

136. Las personas que consideren que han sido objeto de discriminación tienen derecho a reclamar ante un tribunal laboral, en caso de discriminación en el empleo, o ante un tribunal civil en los demás casos. Por ese procedimiento cabe obtener reparación en forma de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, declaración de derechos u orden de ejecutar, o de abstener de ejecutar, determinados actos. Contra las decisiones de los tribunales existe en estos casos el derecho de apelación.

137. La Comisión de Igualdad de Oportunidades, establecida en virtud de la Ley de 1975 contribuye a la observancia de estas leyes, ofrece asesoramiento y asistencia a las personas que se consideran objeto de discriminación, promueve la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y sigue de cerca la aplicación de las disposiciones pertinentes. La Comisión tiene además un código práctico para la eliminación de la discriminación en el empleo.

138. En Irlanda del Norte, el Decreto sobre discriminación por motivos de sexo de 1976 declara ilegal la discriminación por motivos de sexo o matrimonio, tanto en el empleo como en la provisión de bienes, instalaciones y servicios. Por ese Decreto se estableció también la Comisión de Igualdad de Oportunidades, que controla, en Irlanda de Norte, la aplicación del Decreto, investiga las prácticas discriminatorias ilegales y, cuando es necesario, adopta las medidas coercitivas adecuadas.

139. En virtud de la legislación de la Comunidad Europea, los Estados miembros están obligados a suprimir toda discriminación existente en los planes legales de seguridad social que ofrecen protección contra las enfermedades, el desempleo, la invalidez, la vejez, los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales. Existen, sin embargo, excepciones como la determinación de la edad de jubilación. El Reino Unido ha tomado medidas para aplicar en su sistema de seguridad social la legislación comunitaria.

Relaciones raciales

140. La promoción de la igualdad de oportunidades en una sociedad multirracial en la que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones es el objeto central de la política del Gobierno en materia de relaciones raciales. La política que han venido aplicando sucesivos gobiernos británicos es la de velar por que los miembros de las minorías étnicas que viven en Gran Bretaña tengan, sean cuales fueren sus orígenes étnicos, las mismas oportunidades de contribuir a la sociedad y beneficiarse de ella.

141. En virtud de la Ley de relaciones raciales de 1976, que reforzó y sustituyó la legislación anterior en Inglaterra, Escocia y Gales, es ilegal hacer a cualquier persona objeto de trato menos favorable que a otra, por motivos de color, raza, nacionalidad (con inclusión de la ciudadanía) u origen étnico o nacional y tanto por lo que respecta al empleo (incluida la formación) como a la educación y la provisión al público de viviendas, bienes, instalaciones, servicios y locales. Salvo pocas excepciones, también son ilegales los anuncios que reflejan una intención discriminatoria. El procedimiento relativo a la tramitación de las quejas por discriminación racial es el mismo que el que se aplica a las quejas por discriminación sexual; las personas discriminadas tienen derecho a reclamar directamente ante los tribunales civiles y los tribunales laborales.

142. La función de la Comisión de Igualdad Racial, establecida en virtud de la Ley de 1976, consiste en eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y las buenas relaciones raciales, y seguir constantemente de cerca la aplicación de la Ley. La Comisión proporciona información y asesoramiento al público sobre la Ley y puede, en virtud de sus facultades discrecionales, ayudar a las personas que se consideren víctimas de

discriminación ilegal. Ha elaborado además un código práctico para la eliminación de la discriminación racial y la promoción de la igualdad de oportunidades en el empleo, código que ofrece orientación práctica a los empleadores, los sindicatos y demás interesados acerca de las disposiciones de la Ley; dicho Código fue aprobado por el Parlamento y entró en vigor en abril de 1984. La Comisión otorga, por otra parte, subvenciones para proyectos locales que están siendo llevados a cabo por más de 100 consejos de relaciones intercomunales y por otros órganos. La Ley de Relaciones Raciales no se aplica a Irlanda del Norte, donde rigen, en materia de discriminación, leyes diferentes que se ajustan a las circunstancias locales.

143. La Ley sobre incitación al odio racial ha sido reforzada por la Ley de orden público de 1986, que entró en vigor en abril de 1987. Se considera culpable de delito a toda persona cuyas palabras o comportamiento sean amenazadores, ofensivos o injuriosos o que exhiba, publique o distribuya material de esa índole, no sólo cuando sea probable que incite al odio racial sino también cuando tal haya sido la intención del autor de tales actos. La nueva ley se amplía además al ámbito de la anterior para abarcar la radiodifusión y la televisión (con excepción de la Sociedad Británica de Radiodifusión (BBC) y de la Comisión de Televisión Independiente), la televisión por cable y otros medios de información que supongan la transmisión de imágenes visuales o de sonido. También es delito poseer material racialmente subversivo, y se han concedido a las autoridades competentes facultades para la búsqueda, el embargo y la confiscación de dicho material.

Protección de los datos de carácter personal

144. La creciente capacidad de los ordenadores para reunir y redistribuir información sobre las personas es asunto que viene preocupando desde el comienzo de los años setenta. La Ley sobre la protección de los datos de carácter personal de 1984 introdujo salvaguardias en cuanto al tratamiento computadorizado de los datos personales. Esto a su vez permitió que el Reino Unido ratificase la Convención sobre la Protección de Datos Personales, del Consejo de Europa y lograrse así que el comercio con países como Francia y Alemania no se viese obstaculizado por restricciones artificiales impuestas por determinados países a la transferencia de información.

145. Los principios sobre la protección de los datos establecidos por la Ley de 1984 exigen, por ejemplo, que los datos personales sean tratados leal y legalmente, que sólo se utilicen para fines determinados y que estén debidamente protegidos. Las personas que desean elaborar esos datos deben (salvo algunas excepciones) inscribirse en el Registro para la Protección de los Datos Personales, cuyo titular está facultado para hacer aplicar los principios de la Ley.

146. Aunque la Ley (y la Convención en que se basa) se refieren a la protección de los datos personales, también están destinadas a facilitar su transmisión; para ello se han establecido salvaguardias que han permitido establecer el debido equilibrio entre el derecho a conocer y la vida privada de una persona. Es un error común creer que la Ley brinda una protección absoluta a los datos personales; más bien, reglamenta su revelación.

Los datos pueden, por ejemplo, ser legalmente revelados a terceros que estén registrados como usuarios.

Quejas contra la policía

147. La tramitación de las quejas contra la policía está regulada por la Parte IX de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal de 1984 y en los reglamentos de la policía.

148. La Ley de 1984 abolió la Comisión de Quejas contra la Policía establecida con arreglo a la Ley de Policía de 1976 y estableció en su lugar el Organismo de Quejas contra la Policía. Con arreglo a esta parte de la Ley, que entró en vigor el 29 de abril de 1985, el Organismo sólo puede supervisar la investigación de los hechos ocurridos a partir del 29 de abril de 1984, pero el resto de sus facultades (por ejemplo, con respecto a la disciplina) no está sometido a esa limitación. Las funciones del Organismo de Quejas son las que a continuación se describen.

149. El artículo 84 de la Ley define como "queja" a efectos de la propia Ley toda queja que, acerca de la conducta de un funcionario de la policía, sea formulada por un particular, o en nombre y con el consentimiento escrito de un particular. El mismo artículo estipula que cualquier aspecto de una queja que se refiera a la dirección y el control de una unidad de la policía por el jefe de la misma o por una persona que desempeñe las funciones de éste queda fuera del ámbito de las disposiciones relativas a la tramitación de las quejas que figuran en la Parte IX de la Ley sobre la policía y los medios de prueba en materia criminal.

150. Conforme al artículo 86 de la Ley, cuando se presenta una queja contra un funcionario superior, la autoridad policial competente debe registrarla e investigarla, con la salvedad de que, si dicha autoridad llega a la conclusión de que la conducta denunciada, aun si llegara a probarse, no justificaría un encausamiento penal o disciplinario, puede tratar la queja con arreglo a su buen criterio.

151. En virtud del artículo 85 de la Ley, si un jefe de la policía recibe una queja contra un funcionario de su unidad de la categoría de comisario jefe o inferior, debe registrarla y disponer que se resuelva de manera oficiosa o, si no le fuere aplicable ese procedimiento, que sea objeto de investigación oficial.

152. En ciertas circunstancias cabe prescindir del requisito de investigación oficial de las quejas o de solución oficiosa. El Reglamento general sobre quejas contra la policía de 1985 prevé esa posibilidad en caso de retiro de la queja. Las disposiciones de 1985 relativas a la exención del requisito de investigación de las quejas, que fueron enmendadas por las disposiciones de 1990 relativas a la misma cuestión, prevé dicha exención en las siguientes circunstancias:

- a) si la queja es anónima o reiterativa;
- b) si se estima que la queja es reiterativa y si la queja anterior se ha resuelto de modo oficioso;

- c) si la queja es vejatoria, u opresiva, o si por cualquier otro motivo, constituye un abuso del procedimiento aplicable a las quejas;
- d) si han transcurrido más de 12 meses entre el incidente, o el último incidente, a que se refiere la queja, y la formulación de ésta, y no hay ninguna razón que justifique la demora, o es probable que la demora lleve a una solución injusta.

153. El artículo 85 de la Ley de 1984 dispone que la primera medida que debe adoptar el jefe de policía que haya registrado una queja es considerar si ésta puede ser resuelta de manera oficiosa, y en tal caso designar a un funcionario que tenga como mínimo la categoría de inspector jefe para que se encargue del procedimiento. Las quejas sólo pueden resolverse de modo oficioso cuando la conducta a que se refieran no justificaría, aun en el caso de poder probarse, un encausamiento penal o disciplinario y siempre que el denunciante esté de acuerdo con ese procedimiento.

154. El procedimiento oficioso constituye una manera flexible y sencilla de tratar las quejas de menor entidad evitando todo el largo proceso de la investigación oficial. Tal procedimiento es apropiado cuando desde el principio resulta claro que la presunta conducta delictuosa o infracción del código disciplinario no daría probablemente lugar, aun de probarse su veracidad, a la formulación oficial de cargos penales o disciplinarios, sino a una simple amonestación o una advertencia; o cuando la investigación preliminar demuestre que la conducta ha sido legal y razonable.

155. El procedimiento oficioso se rige por un reglamento de 1985, el cual exige que el funcionario designado para tratar de resolver la queja por el procedimiento oficioso recabe la opinión tanto del denunciante como del funcionario que ha sido denunciado. Su tarea consiste en llegar a un arreglo que permita considerar al denunciante que su queja ha sido tratada de la manera apropiada. Esto no implica necesariamente la presentación de excusas en nombre de la policía o del agente denunciado. En algunos casos basta con explicar al denunciante la ley o los procedimientos a que se atuvo el funcionario cuando se produjo el incidente que dio lugar a la queja. Otras veces, sin embargo, puede haber una diferencia irreconciliable entre la descripción del incidente hecha por el denunciante y la versión del funcionario, en cuyo caso también suele ser suficiente explicar la situación al denunciante e invitarle a admitir que no se puede hacer más. La única limitación que impone el reglamento a la libertad del funcionario designado para tratar de resolver la queja del modo más apropiado es su obligación de no presentar excusas en nombre del funcionario implicado a menos que éste haya reconocido la conducta que se le reprocha.

156. Cuando el jefe de policía, después de haber intentado en vano resolver la queja por el procedimiento oficioso, ve que éste no da resultado, o que la queja no puede, por cualquier otra razón, resolverse por esa vía, dispondrá que se proceda a una investigación oficial. En esos casos sucede lo siguiente:

- a) Transmisión obligatoria de la queja al organismo de quejas contra la policía. Si el jefe de policía decide que una queja debe ser oficialmente investigada, primero considerará si es necesario o conveniente que de la queja se dé traslado al Organismo de quejas

contra la policía para que éste supervise la investigación. El inciso 1) a) i) del artículo 87 de la Ley de 1984 estipula que el jefe de policía debe transmitir al Organismo toda denuncia en la que se afirme que la conducta denunciada ha ocasionado muerte o lesiones graves a otra persona. El reglamento sobre la transmisión obligatoria, etc. de quejas contra la policía de 1985 exige que se transmitan al Organismo todas las quejas en las que se denuncien actos que, de haber tenido lugar, habrían constituido una agresión con daños corporales reales; o un delito en virtud del artículo 1 de la Ley de prevención de la corrupción de 1904; o un delito grave sancionado con la detención en el sentido de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de 1984. La denuncia debe ser notificada al Organismo dentro de un plazo determinado;

- b) Transmisión facultativa al Organismo de quejas contra la policía. El apartado b) del párrafo 1 del artículo 87 de la Ley de 1984 estipula que el jefe de policía puede poner en conocimiento del organismo cualquier denuncia que no tenga obligación de transmitir. El párrafo 2 del artículo 87 faculta al Organismo para solicitar que se le transmita cualquier denuncia que no le haya sido transmitida por el jefe de policía. En virtud del artículo 88, cualquier cuestión que no haya sido objeto de queja y que constituya un indicio de que un policía pudiere haber cometido un delito penal o disciplinario puede ser puesta en conocimiento del Organismo, si así lo considera conveniente el jefe de policía en razón de su gravedad o por circunstancias excepcionales;
- c) La función del Organismo de quejas contra la policía. El Organismo de quejas contra la policía debe supervisar la investigación de toda queja que se le transmita en virtud del inciso 1) a) i) del artículo 87 de la Ley de 1984, y de cualquier otra queja (o cuestión que no haya sido objeto de queja y que haya sido puesta en su conocimiento en virtud del artículo 88) siempre que considere conveniente hacerlo en pro del interés público. Si el Organismo supervisa una investigación, puede optar por ejercer el derecho que le reconoce el artículo 89 de la Ley de aprobar el nombramiento del funcionario instructor;
- d) El funcionario instructor. El artículo 85 de la Ley de 1984 dispone que el funcionario nombrado para efectuar una investigación oficial debe tener al menos la categoría de inspector jefe y, como mínimo, la del funcionario contra el cual se haya presentado la queja. Además, con arreglo al reglamento disciplinario de la policía de 1985, debe prestar servicio en una subdivisión o sección distinta de la del funcionario acusado. En los casos en que así convenga, el jefe de la policía invitará a efectuar la investigación a un funcionario de otra unidad.

157. Una vez que haya finalizado su investigación, o la haya practicado hasta donde razonablemente quepa hacerlo, el funcionario instructor transmitirá un informe al jefe de policía. Si la investigación ha sido supervisada por el Organismo de quejas contra la policía, presentará, en cambio, ese informe al propio Organismo y enviará copia de él al jefe de policía. Una vez finalizada

una investigación que haya supervisado, el Organismo deberá hacer pública una declaración (que se enviará al jefe de policía, al denunciante y al funcionario denunciado), en la que se indique si la investigación se ha realizado, a su juicio, correctamente, y se especifiquen los aspectos en que considere que no se ha hecho así. Si estima que la investigación se ha realizado correctamente, puede también hacer constar las razones que tiene para ello.

158. En virtud del párrafo 4 del artículo 90 de la ley de 1984, si un jefe de la policía determina que un informe de investigación a él transmitido indica que uno de sus subordinados puede haber cometido un delito penal, y si considera que el supuesto delito es tal que el funcionario debería ser inculcado, enviará copia del informe al Fiscal General. Este comunicará directamente al denunciante su decisión de si el funcionario de la policía denunciado debe ser inculcado o no. El Fiscal General no explica las razones de su decisión, pero si se ha pronunciado en contra de la inculcación, en las respuestas enviadas al denunciante y al jefe de policía indicará normalmente si considera que las pruebas no justifican un proceso penal o si la incoación de tal proceso no va a redundar necesariamente en pro del interés público.

159. Una vez considerados todos los aspectos penales, el jefe de policía debe transmitir el caso al Organismo de quejas contra la policía (juntamente con un ejemplar del informe de la investigación, en caso de que el organismo no la hubiere supervisado), exponiendo su parecer sobre la queja e informando sobre cualquier cargo disciplinario que haya formulado o que se proponga formular o incluso, en el caso de que no se formulen cargos disciplinarios, sus motivos para no hacerlo. El jefe de policía no está obligado a someter el caso al examen del Organismo si ya ha formulado cargos disciplinarios y si el funcionario denunciado ha admitido los cargos y no se ha retractado después.

160. Si el Organismo de quejas contra la policía considera que habría que formular un cargo disciplinario contra un funcionario o por una denuncia que no haya dado ya lugar a cargos disciplinarios, recomendará al jefe de policía el cargo que le parezca que haya que formular y fundamentará su recomendación. El jefe de policía comunicará al Organismo si acepta su recomendación y, en caso afirmativo, la pondrá en ejecución. En caso de que el jefe de policía disienta de la recomendación del Organismo de formular un cargo disciplinario, podrá debatir la cuestión con éste, pero, en último término, si no se llega a un acuerdo mutuo, el Organismo está facultado para dar instrucciones al jefe de policía para que formule los cargos disciplinarios especificados.

161. El artículo 104 de la Ley de 1984 trata de la cuestión del riesgo de doble condena o absolución y estipula que si un miembro de una unidad de la policía ha sido condenado o absuelto con relación a un delito penal, no podrá ser acusado de ninguna falta contra la disciplina que en sustancia constituya el mismo hecho que el delito con relación al cual haya sido condenado o absuelto.

V. INFORMACION Y PUBLICIDAD

162. El Gobierno publica, por conducto del Real Servicio de Publicaciones, el texto de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos que ha firmado el Reino Unido. Los textos publicados se presentan al Parlamento, y se entregan ejemplares de los mismos a las bibliotecas de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Por otra parte, en todas las buenas librerías pueden adquirirse ejemplares de estas publicaciones, que además pueden pedirse prestados a las bibliotecas más importantes.

163. Los informes del Reino Unido a los órganos establecidos con arreglo a los diversos instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas encargados de vigilar el cumplimiento por los Estados Partes de las obligaciones contraídas en virtud de dichos instrumentos son preparados por el Gobierno sobre la base de la información y de las aportaciones de los expertos de diversos departamentos gubernamentales y fuentes externas.
